

Conflicto distributivo y política macroeconómica en Argentina

WILLIAM C. SMITH

INTRODUCCIÓN

EN DICIEMBRE DE 1983, cuando Raúl Alfonsín y su Partido Radical asumieron la responsabilidad de la transición de Argentina de una dictadura autoritaria hacia la democracia, la economía se encontraba inmersa en una profunda crisis. En lugar de ser una repetición de los ya conocidos ciclos de “alto-siga” de las décadas anteriores, la crisis de mediados de los ochenta era de naturaleza estructural, nacida de una lógica perversa cuyas raíces en el capitalismo argentino eran muy profundas. Pocos argentinos, sin importar su convicción ideológica, dudaban de lo imprescindible de las grandes reformas si lo que se deseaba era que el modelo del país posterior a 1930, de industrialización dirigida hacia la sustitución de importaciones, evitara el colapso total. Para la nueva democracia de Argentina, la tarea que le esperaba no podía ser más aterradora, es decir, revertir lo que el propio Alfonsín llamó “cincuenta años de decadencia”.

Las recetas populistas ya conocidas y las ortodoxias liberales habían devastado a la economía argentina, provocando una reducción dramática del mercado interno. Por ejemplo, el desmantelamiento de alrededor del 30% del parque industrial relativamente avanzado de Argentina, había ocurrido por casi una década de inflación de tres dígitos y una especulación financiera desenfrenada. La enorme fuga de capitales había logrado aumentar la deuda externa de los argentinos a proporciones sin precedente, mientras que la inversión interna se precipitó a sólo 30% del promedio de la década anterior y el producto nacional bruto (PBI) permaneció estancado en los niveles de mediados de la década de 1970 (Smith, 1989b, cap. 9). Además de todo lo anterior, la estructura de clases de Argentina pasó por transformaciones radicales que llevaron a la creciente concentración de riqueza y a la depauperación no sólo de gran parte de la clase trabajadora, sino también de amplios sectores de la hasta entonces próspera clase media argentina (Palomino, 1985).

A pesar de tener los pies bien puestos sobre la tierra, Alfonsín y sus colaboradores confiaban en que el mandato electoral ganado en octubre de 1983 proporcionaba a los radicales la legitimidad política necesaria para llevar a cabo la

reestructuración económica a largo plazo. Sin embargo, sólo cinco años después, el optimismo inicial de los radicales se había roto debido a la hiperinflación galopante y a la amenaza de disturbios sociales masivos. De manera similar, se vino abajo el proyecto de los radicales de mantener una mayoría electoral permanente, como lo comprobó la abrumadora victoria del peronista Carlos Saúl Menem durante las elecciones presidenciales de mayo de 1989.

¿Cuál es la realidad? Que las políticas económicas de Alfonsín fueron un desastre total, como lo subrayan sus rivales políticos y muchos economistas o, como lo afirman los defensores del gobierno radical, a pesar de sus muchos y obvios fracasos, las políticas de Alfonsín lograron proteger a la frágil democracia de Argentina de una vuelta al autoritarismo. ¿Cuáles son las lecciones de la experiencia de Alfonsín no sólo para Argentina, sino también para otros países latinoamericanos que están viviendo niveles inflacionarios y problemas de deuda externa similares?

CRISIS DE LA DEUDA, INFLACIÓN Y CONFLICTOS DE DISTRIBUCIÓN COMO OBSTÁCULOS PARA LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS MACROECONÓMICAS

Para poder evaluar la actuación de Alfonsín, debemos situar al gobierno del Partido Radical en el contexto de los obstáculos estructurales que debió enfrentar el nuevo régimen democrático a mediados de los años ochenta.¹ La inflación persistentemente alta y una deuda externa inmensa pesaban por sobre todas las otras cosas. La inflación en 1983, último año de los militares en el poder, había sido de 343.8% y se aceleró con rapidez bajo el gobierno civil, llegando a 626.7% en 1984. La deuda externa argentina (la cual en 1983 era de 46 000 millones, es decir, casi 80% del PNB) se había incrementado a más de 40 000 millones desde mediados de los años setenta. Prácticamente ninguno de estos fondos llegaron a ser inversiones productivas. De hecho, la hemorragia masiva producida por la fuga de capitales representó casi las dos terceras partes del aumento total de la deuda externa. El cuadro 1 esboza el panorama de la deuda externa de Argentina.²

¹ Esta sección se basa en el reciente trabajo de Roberto Frenkel y sus colegas del CEDES. Véase Frenkel, Fanelli y Sommer (1988); Frenkel y Rozenwurcel (1988), y Fanelli, Frenkel y Winograd (1989). También véase Dornbusch y De Pablo (1988).

² En 1985, los argentinos poseían una reserva de bienes en el extranjero valuada en 433 200 millones de dólares o 93.6% de la deuda externa del país en ese momento. Véase Banco Mundial (1987).

Cuadro 1
INDICADORES DE LA CARGA DE LA DEUDA ARGENTINA
(millones de dólares estadounidenses)

	Deuda externa	Nuevos préstamos	Pagos de deuda principal	Pagos de intereses	Transferencia neta (a)
1970(b)	\$ 5 171	\$ 907	\$ 772	\$ 338	\$ 203
1975(b)	6 581	920	1 422	723	-1 225
1980	27 157	4 708	1 853	1 337	1 518
1981	35 657	8 346	1 950	2 045	4 352
1982	43 643	7 054	1 294	2 435	3 325
1983	45 925	2 833	1 364	2 417	-948
1984	48 856	802	812	3 277	-3 268
1985	49 715	3 790	1 018	4 389	-1 617
1986	49 715	2 602	2 043	3 707	-3 147
1987	56 813	3 116	695	3 775	-1 354
1988(c)	60 200	2 600	1 759	2 757	-1 916

FUENTE: Sara Bartlett, "A Vicious Circle in the Latin American Debt Crisis", *New York Times*, 15 de enero, 1989 basado en información del Banco Mundial, el Instituto de Finanzas Internacionales y J.P. Morgan and Company.

- (a) Diferencia entre nuevos préstamos y el pago de los préstamos existentes.
(b) No incluye la deuda a corto plazo.
(c) Aproximado.

El propio Estado financió la mayoría de esta fuga de capitales. Por otra parte, luego de la "estatización" de la deuda externa del sector privado por parte del régimen militar, el gobierno adquirió la responsabilidad legal del servicio del 90% la deuda (Basualdo, 1987). Las consecuencias de lo anterior para las finanzas públicas fueron desastrosas. La crisis de la deuda produjo una crisis fiscal grave para el Estado que naturalmente tuvo consecuencias desastrosas en el nivel, costo y calidad de los servicios públicos (energía, transporte, educación, salud, etcétera), así como en la capacidad del Estado para servir como agente de la redistribución de los ingresos en favor de los sectores más pobres de la población. El servicio de la deuda también limitó gravemente la capacidad del Estado para realizar inversiones reproductivas directamente (capaces de fomentar la inversión privada).³ En este mismo sentido, surgieron obstáculos similares para el crecimiento e importantes efectos regresivos sobre la distribución de los ingresos a partir de la necesidad del gobierno de frenar la importación y promover la exportación para poder mantener un superávit permanente (Frenkel y Rosenworcel, 1988).

³ Durante la década de 1970, el ahorro público fue en promedio de 1.9% del PNB; el ahorro del sector privado nacional de 19.2% y el ahorro del sector externo de 0.6% del PNB. En la década de 1980, después de la crisis de la deuda, el ahorro gubernamental se volvió negativo, promediando -3.4% del PNB; el ahorro del sector privado cayó a 13.2% y el ahorro externo aumentó a 4.3% del PNB. Véase Fanelli, Frenkel y Winograd (1989: 5).

La crisis de la deuda modificó profundamente las relaciones entre el Estado y el capital privado. Además de la fuga de capital neta hacia el exterior, se presentó el “problema de la transferencia interna”. En esta situación, mientras el Estado debe pagar los intereses de la deuda externa, es el sector privado quien “posee” las divisas extranjeras generadas por las exportaciones. El Estado debe “comprar” este excedente de divisas fuertes y simultáneamente financiar sus propias operaciones mediante el aumento en los ingresos fiscales y/o la reducción del gasto público. Si el gobierno no puede aumentar los impuestos o recortar los gastos, el déficit fiscal resultante debe financiarse, sea mediante la emisión de dinero inflacionario o la venta de la deuda pública al sector privado. Sin embargo, dados los altos niveles de incertidumbre política e inestabilidad macroeconómica, los compradores privados de bonos públicos demandan tasas de interés muy altas, lo que deprime aún más la inversión y el crecimiento. Ningún mecanismo, ni el aumento de las reservas monetarias ni la emisión de deuda pública, puede sostenerse mucho tiempo sin correr el riesgo de caer en la “dolarización” del ahorro interno y los bienes financieros.

Como consecuencia de lo anterior, las élites estatales tuvieron que considerar cuidadosamente las propuestas de políticas que el sector privado pudiera considerar amenazadoras al “clima empresarial”, debido a que incluso las reformas de políticas más moderadas podrían influir en la confianza del inversionista. Por ejemplo, el apoyo a los aumentos salariales, los programas sociales para los pobres e impuestos fiscales corporativos más altos, todas eran medidas que corrían el riesgo de que las inversiones planificadas pudieran posponerse o que los exportadores inquietos o los especuladores pudieran depositar sus dólares en el exterior.

En el caso argentino, la forma explosiva de la emisión de deuda se sumó a la “cultura inflacionaria” profundamente enraizada, que lleva a la mayoría de los individuos, sin importar su clase social o sus circunstancias, a actuar en función de las expectativas de que la inflación será alta y/o su aumento en el futuro cercano o intermedio. La feroz búsqueda de ganancias (una absoluta despreocupación por el futuro más lejano), conforma de manera importante el comportamiento microeconómico de las empresas del sector privado, público, sindicatos e inversionistas individuales y consumidores, y genera niveles muy altos de conflictos de distribución de la riqueza.

Estos conflictos en la Argentina contemporánea ejemplifican una lógica general presente en todas las sociedades de mercado, así como las características específicas que se encuentran en sociedades con deudas externas onerosas. Primero, cualquier sociedad en la cual el gobierno intenta aplicar un programa de estabilización en el contexto de un estancamiento económico, inevitablemente tendrá que enfrentar disyuntivas desventajosas de tipo “suma-cero” que producirán pérdidas de ingresos para el trabajo organizado, algunos sectores de la clase media y los sectores más débiles del comercio y la industria. Segundo, en el caso especial de las sociedades con grandes flujos de capital hacia el exterior, los gobiernos no sólo deberán manejar los conflictos de distribución normales relacionados con las transferencias intersectoriales de ingresos producidos por la alta inflación, sino

que simultáneamente deberán enfrentar las consecuencias negativas producidas por una reducción neta de la riqueza colectiva de la sociedad. Cuando se combinan esta lógica general y condiciones específicas, como es el caso de Argentina, los costos de la estabilización económica aumentan de manera exponencial y podrían con facilidad transtornar a las democracias en transición.

Los conflictos de distribución del tipo que ocurren en Argentina y otros países deudores, lleva a un patrón de interacción estratégica que se asemeja mucho al “dilema del prisionero” (Lipnowski y Maital, 1985; Heyman, Navajas y Warner, 1989). En este juego de acción colectiva, los actores racionales (élites estatales, dirigentes partidarios, sindicatos e intereses empresariales), generalmente adoptarán estrategias de no cooperación. Sin embargo, si todos los actores deliberadamente tienen comportamientos de confrontación, incluso los “ganadores” a corto plazo corren el riesgo de volverse “perdedores”. Desde el punto de vista de la sociedad en su conjunto, los resultados muy probablemente no serán los óptimos, y por consiguiente generarán una inflación superior, una mayor ineficiencia de inversiones y por ello, un crecimiento más lento, mayor desigualdad y, por supuesto, niveles superiores de conflicto político.

Para poder gobernar con éxito, los políticos que participan en el juego de consolidación democrática deben intentar dismantelar la lógica del conflicto de distribución, mediante la creación de reglas consensuales basadas en instituciones sociales y políticas fuertes. Si se desea una estabilización exitosa, tales acuerdos institucionales son necesarios para promover una cooperación mayor y prerrequisitos para compartir la carga con mayor equidad. Como corolario, los políticos y los funcionarios democráticos necesitan una combinación de sanciones e incentivos, para lograr que los principales actores colectivos desistan de intentar estrategias antisociales de *free-riding*.^{*} Este tipo de actitudes generalmente implica intentos por parte de empresarios, sindicatos y partidos políticos, por pasarse los costos de las políticas de estabilización los unos a los otros, hacia grupos no organizados o hacia el propio Estado.

En resumen, esta breve incursión a la macroeconomía de la crisis de la deuda, así como a los problemas de acción colectiva creados por la alta inflación resalta las contradicciones que deben enfrentar quienes diseñan las políticas: prácticamente toda política dirigida hacia la resolución de un problema específico, generalmente produce o exacerba otro problema. También señala el aumento de poder del sector privado y la consecuente pérdida de poder estatal. Los “ahorradores” locales y extranjeros adquieren un tremendo poder de veto respecto a políticas gubernamentales (tasas de cambio, políticas fiscales y monetarias, etcétera), que limitan la libertad de los empresarios para utilizar sus bienes como les venga en gana, con propósitos tanto especulativos como productivos.

* En la teoría de la acción colectiva, se trata del comportamiento de algún actor (empresarios, sindicatos, etc.) que aprovecha para “colarse” recibiendo un bien colectivo “indivisible”, sin ningún esfuerzo propio y sin colaborar con el sacrificio común. Por ejemplo, en el caso de políticas antiinflacionarias, sin apretarse el cinturón para colaborar con la austeridad. O cuando, tanto capitalistas como obreros se benefician de la caída de la tasa de inflación, producida por un plan de estabilización.

Por supuesto, los resultados económicos y políticos no sólo se determinan por obstáculos externos o por las decisiones de inversión del sector privado. Las luchas políticas más amplias entre los grupos opuestos son fundamentales. La capacidad de otros actores —incluyendo élites estatales, partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales de base, etcétera— para movilizar sus propios recursos políticos, ideológicos y de organización podrían modificar los obstáculos externos e internos que normalmente influyen en las políticas estatales, de manera que resulten congruentes con los intereses privados. Existen también las soluciones reformistas con costos sociales y económicos menores para los grupos subordinados, sin embargo, la implacable persecución de intereses sectoriales por parte de los principales actores colectivos podría impedir que los políticos del gobierno instrumenten cualquier estrategia macroeconómica coherente. De manera similar, la exacerbación de conflictos de distribución no resueltos representa peligros graves para la supervivencia y consolidación de las democracias frágiles.

POLÍTICAS MACROECONÓMICAS EN LA ÉPOCA DE ALFONSÍN

Los años del gobierno de Alfonsín pueden dividirse, para efectos de un análisis útil, en seis fases fundamentalmente distintas de creación de políticas macroeconómicas. La discusión de cada fase combina una explicación de las medidas clave de las políticas económicas y sus resultados a corto plazo, con un análisis de la evolución de interacciones estratégicas entre las élites estatales, los diferentes sectores de la clase empresarial y el movimiento obrero organizado.

1. *La ilusión keynesiana (diciembre de 1983 - febrero de 1985)*

Una vez en el poder, Alfonsín buscó inmediatamente asegurar el liderazgo del nuevo gobierno democrático en diversas áreas como las violaciones a los derechos humanos, las relaciones con los sindicatos peronistas y las negociaciones con los acreedores de la deuda externa. Este deseo de audacia fue particularmente evidente en el estilo unilateral de creación de políticas macroeconómicas, que daba una prioridad menor a las negociaciones con la oposición política o a las consultas con los intereses de la sociedad civil. Además, la determinación de Alfonsín de poner en el mismo nivel prioritario a la equidad social y al crecimiento, hizo que el nuevo gobierno se encaminara desde el principio hacia el enfrentamiento con los acreedores de Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya ortodoxia subrayaba el combate a la inflación, la disminución del déficit fiscal y la restauración del equilibrio en la balanza de pagos.

Bernardo Grinspun, el primer ministro de Economía de Alfonsín, siguió la estrategia de llevar las cosas hasta el extremo en un *chicken-game** financiero, mediante la suspensión de todos los pagos al capital principal y el retraso sistemático de los pagos de interés, forzando así al FMI, a la banca acreedora y a los gobiernos extranjeros a rescatarlo mediante una combinación de préstamos puente y restructuración de la deuda.⁴ Pero, este desafío al FMI y a la banca fue de corta duración. A principios de septiembre de 1984, Argentina inició nuevamente los pagos de interés y sucumbió a la presión internacional para llegar a un acuerdo con el FMI. Sin embargo, en el primer trimestre de 1985, los aumentos de precios mensuales en Argentina, que promediaban 24.1%, violaban los objetivos de austeridad impuestos por el FMI, quien junto con los bancos, suspendió cualquier nuevo préstamo en marzo de 1985 (Stiles, 1987: 68; García y Junco, 1987).

La estrategia de Grinspun se basaba en la suposición errónea de que las políticas keynesianas aplicadas veinte años antes por los radicales, durante el breve gobierno de Illia (1963-66), eran aún viables. Esta estrategia nostálgica no tomó en consideración la profunda desarticulación de la estructura productiva, consecuencia del proyecto neoliberal aplicado durante el régimen militar posterior a 1976 (Smith, 1989b: cap. 9). La amenaza de hiperinflación y las dificultades para reactivar la asolada economía fueron testimonio elocuente de esta visión equivocada. La negativa de Grinspun de modificarla llevó a su renuncia en febrero de 1985.

Una parte del problema fue que los radicales no tenían una política industrial clara y contaban con pocos aliados industriales. De hecho, los radicales nunca habían tenido el apoyo de los sectores dominantes de la clase empresarial nacional y muchas menos relaciones con las empresas transnacionales y la banca internacional. Por consiguiente, dada la preferencia de muchos empresarios por la especulación financiera sobre la inversión productiva, no fue sorprendente que la estrategia económica del gobierno llevara a crecientes confrontaciones con los intereses empresariales locales y transnacionales.

Los intereses agroexportadores, dirigidos por la Sociedad Rural Argentina (SRA), rechazaron agresivamente todas las medidas como los impuestos a las exportaciones primarias y las limitaciones a la venta nacional de carne, que iban en contra del usufructo del excedente generado por el campo. La Unión Industrial Argentina (UIA), la organización más importante del sector manufacturero, también criticaba enérgicamente cualquier forma de intervención estatal en la economía y resistía firmemente los esfuerzos por aumentar los ingresos fiscales, demandando al mismo tiempo la eliminación del déficit fiscal. El sector financiero, representado por la banca internacional afiliada a la Asociación de Bancos de la República

* Se designa con este término al juego en el que dos autos corren hasta casi chocar y uno de los dos cede en el último momento.

⁴ A mediados de 1984, el presidente dijo: "Es como si los centros (financieros) se hubieran vuelto locos, pero no pagaremos la usura. . . Parece como si los países en desarrollo estuviesen siendo atacados al revés por una bomba de neutrones, la cual deja vivos a los hombres, a las mujeres y a otras criaturas, destruyendo el aparato productivo del país. Esta locura debe terminar de una vez por todas". Citado por Monteón (1987: 21).

Argentina (ABRA) y la banca de propiedad nacional perteneciente a la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), pugnaron exitosamente contra las propuestas legislativas para penalizar la especulación financiera y reorientar al capital hacia empresas productivas (Schvarzer y Sidicaro, 1987).

Por otra parte, el gobierno de Alfonsín tampoco tuvo mejor suerte con los sindicatos ni con los partidos de oposición en el Congreso. Las iniciativas clave, como una propuesta legislativa radical para reestructurar y democratizar a los sindicatos controlados por los peronistas (la llamada Ley Mucci) fueron derrotadas en el Congreso. De la misma forma, en junio de 1984, el fracaso de la propuesta de los radicales para llegar a un pacto político (la llamada Acta de Coincidencias) con los peronistas y otros partidos políticos de menor importancia, negó al gobierno el amplio mandato que deseaba para poder poner en práctica sus políticas económicas sin la constante oposición partidaria en el Congreso.

La inclinación del gobierno de Alfonsín hacia la toma de decisiones unilateral y las tensas relaciones tanto con los sindicatos como con el capital durante el período de Grinspun, minó efectivamente cualquier propuesta innovadora de concertación mediante “pactos sociales” que involucraran a los creadores de políticas gubernamentales, las élites sindicales y los intereses empresariales (De Ris, Cavarrozzi y Feldman, 1987; Thompson, 1988a: 17-24). Y esto fue desafortunado, porque como lo sugiere nuestra discusión anterior en torno a los dilemas de la acción colectiva en contextos de alta inflación, las políticas concertadas vía pactos sociales podrían ayudar a las democracias de transición a legitimar decisiones económicas poco populares, al compartir los costos con los actores colectivos clave de la sociedad civil. Los pactos sociales que ofrecen a los sindicatos y empresas una participación en la creación de políticas, también logran desalentar las estrategias de *free-riding*, ayudando así a atenuar los conflictos distributivos.

A pesar del gran apoyo retórico a la idea de los pactos sociales, los propios conflictos internos del gobierno (Ministerio de Economía *vs.* Banco Central *vs.* Ministerio del Interior *vs.* dirigentes del Congreso, etcétera), planteaban obstáculos insuperables para lograr compartir la responsabilidad en cuestiones económicas con trabajadores y capitalistas. Dada la opción de poner en práctica una política macroeconómica “concertada” o gobernar solos, Alfonsín y el equipo económico de Grinspun eligieron hacerlo solos (Thompson, 1988a: 24-27; Thompson, 1988b: 51-56).

Frustrada, la Confederación General del Trabajo (CGT) y las principales organizaciones empresariales, incluyendo la UIA y la SRA, iniciaron su propio intento paralelo para negociar un pacto social sin la participación del gobierno. Esto dio lugar a la formación de un “frente productivo” dirigido por el “Grupo de los Once”, con una alianza temporal de la CGT y diez de las mayores organizaciones empresariales (Corallini, Mosto y Avalle, 1986).

Aproximadamente en la misma época, un grupo de 20 industriales prominentes —comúnmente llamados los “capitanes de la industria”— que representaban muchos de los conglomerados nacionales y transnacionales más grandes y diversificados, fundaron el llamado “Grupo María”. El objetivo de este grupo era es-

tablecer un dialogo más fluido con las autoridades gubernamentales, sin pasar por los molestos canales de intermediación de los intereses controlados por las principales organizaciones empresariales.⁵

Las relaciones entre el Estado y los intereses sindicales y empresariales no mejoraron después de la sustitución de Grinspun por Juan V. Sourrouille, economista egresado de Harvard con credenciales académicas impecables. Por su parte, la dramática declaración de Alfonsín desde el balcón de la Casa Rosada en abril de 1985 de una “economía de guerra”, tampoco ayudó mucho. Más bien ocurrió lo contrario: frente a la fuerte oposición de los “intereses organizados”⁶ de la sociedad, fue claro que el éxito futuro de Sourrouille en el manejo de la inflación y la deuda, dependería casi exclusivamente de la popularidad personal de Alfonsín y la lógica macroeconómica de las políticas que se aplicarían.

2. *El Plan Austral y el choque heterodoxo (junio de 1985 - marzo de 1986)*

La economía argentina requería urgentemente de cambios estructurales importantes. Aunque la estrategia de llevar las cosas al extremo frente a la comunidad internacional había fallado, el equipo económico de Sourrouille rechazaba las políticas de ajuste ortodoxas promovidas por el FMI. La austeridad y la estabilización monetaria eran más imperativas que nunca, pero el equipo económico estaba convencido de que las panaceas ortodoxas conocidas no funcionarían.⁷

Sourrouille eligió aplicar un riesgoso programa antiinflacionario que pedía la instrumentación de políticas fiscales y monetarias bastante ortodoxas, combinadas con un súbito “choque heterodoxo”. Con un alza de 30.5% en los precios al consumidor y el aumento de 42.3% de los precios al mayoreo en junio, el objetivo más inmediato del Plan Austral era forzar a la economía a salir del precipicio de la hiperinflación (Ministerio de Economía, 1985). Dada la precaria situación internacional por la que pasaba Argentina, cuyas relaciones con la banca acreedora se encontraban estancadas y sus reservas de moneda extranjera agotadas, el lanzamiento del Plan Austral el 14 de junio de 1985 no se podía haber hecho en un momento menos propicio. Sin embargo, un punto a su favor fue el fuerte apoyo proporcionado a las autoridades por parte del Tesoro de Estados Unidos y el FMI.⁸

⁵ Además de los intereses industriales, el “Grupo Marfa” incluía una gran variedad de grandes firmas en el terreno de las finanzas, la agricultura y la construcción, precisamente los “grupos económicos” que más se habían beneficiado de las políticas de la dictadura militar. Véanse Azpiazu, Basualdo y Khavisse (1986) y Basualdo (1987).

⁶ Saúl Ubaldini, uno de los principales dirigentes de la CGT, advirtió que: “o cambia el gobierno sus políticas o se va”. Citado en *Clarín* (1985).

⁷ A principios de enero de 1985, un mes antes de la renuncia de Grinspun, Sourrouille, entonces secretario de Planeación, criticó las políticas alternativas e hizo público el proyecto de una nueva estrategia. Véase, Presidencia de la Nación/Secretaría de Planificación (1985).

⁸ En contraste con lo anterior, Brasil se encontraba en una coyuntura mucho más favorable en febrero de 1986, para el lanzamiento de su Plan Cruzado. Aunque la inflación se aceleraba y el gobierno

Conscientes de la tremenda lucha política que había minado los esfuerzos antiinflacionarios previos, Sourrouille y su equipo heterodoxo creían inicialmente que la estabilización eficaz y el ajuste externo exitoso podrían lograrse sin efectos recesivos e impactos regresivos sobre la distribución de los ingresos. En un medio ambiente altamente inflacionario, los heterodoxos argumentaban que la práctica de la “corrección monetaria” (que relacionaba contratos, salarios, bonos, etcétera, con cierto índice corregido según la inflación), había creado un “sistema de memoria” propio que perpetuaba indefinidamente la inflación; la inflación futura era simplemente una función de la inflación del pasado. Los heterodoxos pensaban que esta inflación “inercial” que había comprobado ser tan resistente a las políticas ortodoxas, sólo podía atacarse mediante la eliminación de los efectos de la inflación anterior (Frenkel, 1986; Arida y Lara-Resende, 1986; Lopes, 1986). Consecuentemente, las políticas heterodoxas de choque pretendían erradicar este sistema de memoria por medio de la desindexación total de los precios de los sectores público y privado, y de una reforma monetaria amplia, incluyendo la creación de una nueva moneda con una paridad fija en relación con el dólar.⁹

El control de precios y salarios era la condición *sine qua non* del paradigma heterodoxo. Los heterodoxos favorecían los controles temporales para apaciguar las luchas por la distribución que sufrían los programas convencionales de estabilización. Respetaban el papel de los mecanismos de precios en los mercados competitivos, pero argumentaban que se necesitaban controles muy estrictos para garantizar la estabilidad de los precios hasta que el componente inercial de la inflación hubiera sido eliminado. La teoría argumentaba que una vez que el equilibrio de precios se hubiera logrado y se hubiesen eliminado los factores inerciales, la intervención estatal de los mercados podía eliminarse paulatinamente.

La “mano visible” del Estado supuestamente trasladaría la economía de un equilibrio de alta inflación a uno de baja inflación. Entonces, fuera de los impactos externos y si el gobierno mantenía una política salarial moderada, la competencia y el interés propio de los capitalistas permitiría que la “mano invisible” del mercado reprodujera un equilibrio de baja inflación. Si el Estado combinaba la coordinación transitoria de la fuerza de trabajo y el capital (para modificar las

de Sarney no cumplía con los objetivos del FMI, Brasil disfrutaba de una posición de tasa de cambios muy cómoda y se hallaba en medio de una fuerte recuperación cíclica, con tasas de crecimiento de 4.5 y 8.3% en 1984 y 1985, respectivamente. Estos factores hicieron que el Plan Austral fuera mucho más ortodoxo (algunos dirían que fue una “imitación del FMI”) que su contraparte brasileña. Véase Smith (1989a).

⁹ Los principales instrumentos de la política del Plan Austral consistían en: 1) una nueva moneda (el austral) para sustituir al peso a una tasa de un austral por cada 1 000 pesos, una devaluación de la tasa de cambios del 18% en términos del dólar; 2) la imposición de un congelamiento de precios y salarios; 3) políticas para reducir el déficit presupuestal, incluyendo grandes aumentos en los cargos por servicios estatales (electricidad, productos petroleros, transporte, etcétera); 4) tasas de interés real positivas para el mercado financiero reglamentado para mejorar la confianza del inversionista y detener la especulación en el mercado de cambios paralelo, y 5) el compromiso de no imprimir dinero en cantidades que resultaran inflacionarias y que se llevaría a cabo separando la adquisición de bienes nacionales provenientes de las necesidades de financiamiento del Tesoro por parte del Banco Central.

expectativas inflacionarias y superar el comportamiento no cooperativo) con un ataque concertado a las causas estructurales “profundas” de la inflación, subrayadas por la ortodoxia convencional (proteccionismo, subsidios, tasas de cambio sobrevaluadas, etcétera), entonces sería posible un crecimiento económico renovado con estabilidad de precios (Smith, 1989a: 141-142; Smith, 1989b: 278-279).

Una de las ventajas clave para Alfonsín era que este nuevo plan de estabilización sin recesión reforzaba el principal objetivo político de los radicales, es decir, el fortalecimiento y consolidación de la democracia argentina. De hecho, el Plan Austral fue un estudio de caso temprano que llevó a algunos economistas a sugerir una afinidad electiva entre las políticas de choque heterodoxas y los gobiernos democráticos frágiles (Hirschman, 1987: 28-29).

Las reacciones iniciales al Plan Austral excedieron las expectativas. El 22 de julio de 1985 se firmó una nueva carta de intención con el FMI a cambio de un préstamo de 1 200 millones de dólares, junto con otro por 470 millones. El sello de aprobación del FMI dio legitimidad a la estrategia heterodoxa y estableció un importante precedente para otros experimentos no convencionales de control de la inflación en Bolivia, Perú y Brasil.

Los controles de precios y salarios mantuvieron la inflación en sólo 20.2% durante los seis meses que siguieron a la inauguración del plan, en contraste con aumentos mensuales de 28.4% mensual en el trimestre anterior. Este éxito, evidente en el cuadro 2, permitió al gobierno justificar su afirmación de que el valor de los salarios reales se había mantenido y que cualquier deterioro del poder de compra del consumidor era una herencia de la inflación anterior y no podía culparse de ello a las políticas heterodoxas.

Cuadro 2
TASAS DE INFLACIÓN MENSUAL, 1984-89
(Índice de precios al consumidor)

1984		1985		1986	
Ene.	12.5	"Ilusión keynesiana"	25.1		3.0
Feb.	17.0		20.7	Sale Grinspun	1.7
Mar.	20.3		26.5	Entra Sourrouille	4.6
Abr.	18.5		29.5		4.7
Mayo	17.1		25.1		4.0
Jun.	17.9		30.5	Plan Austral	4.5
Jul.	18.3		6.2		6.8
Ago.	22.8		3.1		8.8
Sept.	27.5	Paquete del FMI	2.0	Victoria radical	7.2
Oct.	19.3		1.9		6.1
Nov.	15.0		2.4	"Parque Norte"	5.3
Dic.	19.7		3.2		4.7
Crecimiento económico modesto					
1987		1988		1989	
Ene.	7.6	Australito	9.1		8.9
Feb.	6.5		10.4		9.6
Mar.	8.2		14.7		17.0
Abr.	3.4		17.2		33.4
Mayo	4.2		15.7		78.5
Jun.	8.0		18.0		114.5
Jul.	10.7	"Pragmatismo"	25.6		196.6
Ago.	13.7		27.6	Plan Primavera	37.9
Sept.	11.7	Victoria peronista	11.7		9.4
Oct.	19.5	Quinto impacto	9.0		5.6
Nov.	10.3		5.7		6.5
Dic.	3.4		6.8		40.1
Victoria de Menem Disturbios por alimentos Menem asume el poder					

FUENTE, INDEC, *Boletín Estadístico*, varios números.

El Plan Austral también logró aumentar de manera significativa el ingreso fiscal de 17.2% del PNB en el trimestre inmediatamente anterior a su inicio, a 23.0% en el último trimestre del año. De este modo, el déficit presupuestal se redujo sustancialmente a sólo 2.4% del PNB a fines de ese año. Sin embargo, el control del déficit del sector público era muy frágil debido a la obligación del Banco Central de cubrir los pagos de la deuda externa previamente adquirida por varias de las grandes empresas estatales.

Los beneficios políticos para el gobierno de Alfonsín y los radicales fueron igualmente gratificantes. La popularidad de Alfonsín y la amplia confianza en el gobierno se reflejaron en los resultados de las elecciones parlamentarias de septiembre de 1985, en las cuales, los radicales obtuvieron el 43% del voto y los peronistas únicamente el 34%. En noviembre de 1985, en su famoso discurso de "Parque Norte", Alfonsín buscó capitalizar esta reafirmación de su mandato haciendo un llamado en busca de un nuevo consenso que apoyara sus planes para la moder-

nización de la economía. Ello fue sin duda alguna el clímax de las esperanzas alfonsinistas de fundar un “Tercer movimiento histórico” (Aznar, *et al.*, 1986).

El éxito en el frente de la estabilización continuó en 1986, disminuyendo las tasas de inflación mensual a un promedio de 3.1% durante el primer trimestre; los precios al mayoreo cayeron aún más drásticamente, promediando sólo 0.7% en el mismo período. Tanto las empresas como los consumidores demostraron su nueva confianza en el gobierno aumentando el ahorro interno en respuesta a las tasas de interés positivas. Simultáneamente, luego de una pequeña baja después del anuncio de las nuevas políticas, la producción industrial aumentó en un fuerte 13% durante el último trimestre de 1985 (Banco Central, 1986: cuadros 1, 15.2, 16; Frenkel y Fanelli, 1987).

A pesar de estos triunfos, las relaciones tanto con los sindicatos como con el capital no fueron muy positivas. La posición de las autoridades económicas fue ambigua. Aunque deseaba el apoyo de los trabajadores y empresarios, el equipo económico se negaba a permitir que los representantes de estos dos sectores tuvieran una participación real en la toma de decisiones. El equipo de Sourrouille alabó sin mucho entusiasmo la idea de un pacto social al admitir la creación de la llamada Conferencia Económica y Social (CES), proporcionando una representación privilegiada al trabajo organizado y a los industriales. Una consecuencia de corto plazo fue la disolución del “frente de producción” entre el movimiento laboral y el sector privado, y el distanciamiento de la UIA en representación de los industriales, de los sectores agrícola, bancario, comercial y de la construcción, cuyas organizaciones no obtuvieron representación en el CES (Acuña y Golbert, 1989: 16).

El apoyo político del sector privado tardó bastante en aparecer. Una combinación de aversión al riesgo, proveniente de sus recuerdos del fracaso de los anteriores planes antiinflacionarios, además de las dudas respecto a la capacidad del equipo de Sourrouille para “mantenerse en curso”, hizo que muchos grandes grupos económicos y compañías transnacionales mantuvieran sus valores financieros en dólares, posponiendo o cancelando al mismo tiempo las inversiones planeadas. Simultáneamente, y esperando mantenerse delante de la espiral inflacionaria, muchos empresarios retuvieron sus productos, evitando sacarlos al mercado para forzar un aumento en los precios. Estas medidas protectoras, aunque sin duda eran respuestas racionales de la empresa, exacerbaron la inflación y dificultaron aún más la reactivación económica. No obstante, las fuertes críticas a ciertas políticas, la mayoría de los empresarios siguió apoyando la estrategia general del Plan Austral.¹⁰

En contraste con lo anterior, el sindicalismo encabezado por la CGT, fue desde un principio mucho más abierto en su rechazo del Plan Austral. Con un equipo económico sordo a las demandas sindicales de compensación, por la posición desfavorable de la mayoría de los trabajadores en el momento del congelamiento

¹⁰ Por ejemplo, el presidente de la UIA, Roberto Favlevic, en su discurso del “Día de la industria”, habló directamente a Alfonsín y proclamó que “según mis convicciones más íntimas, sólo puedo decir... lo felicito señor presidente”. Citado en Acuña y Golbert (1989: 19).

inicial, el movimiento laboral adoptó el arma de la huelga para apoyar las exigencias de grandes aumentos en los salarios nominales (De Ris, Cavarozzi y Feldman, 1987, pp. 17-18). De este modo, los conflictos distributivos cada vez más agudos reforzaron nuevamente la mentalidad de ganancias negativas, puesto que los trabajadores, industriales, productores agropecuarios y comerciantes, pugnan por una reestructuración de los precios relativos a su favor. El cuadro 3 puede darnos una idea de las huelgas ocurridas durante el período de Alfonsín.

Cuadro 3
CONFLICTOS LABORALES, 1985-89

	1985	1986	1987	1988	1989
Ene.	52	17 CGT	13 CGT	25	21
Feb.	24	21	12	27	31 Debacle
Mar.	48	33	13	51	32
Abr.	42	45 CGT	11	56 CGT	38
May.	28 CGT	55	28	53	71 Victoria de Menem
Jun.	26 Austral	69 CGT	39	66	52 Disturbios por alimentos
Jul.	24	52	42	48	58 Menem asume el poder
Ago.	12 CGT	52	48	47 Plan Primavera	50
Sept.	19 Elec.	67	56 Elec.	37 CGT	51
Oct.	31	66 CGT	51	55	48
Nov.	16	54	50 CGT	45	
Dic.	22	32	35 CGT	31	

FUENTE: *El Bimestre Político y Económico*, diversos números.

Nota: CGT= huelga nacional de todos los sindicatos afiliados a la CGT. Elec.= Elecciones.

Para inicios de 1986 tuvo que enfrentar dos opciones: el equipo económico podía recurrir a una política monetaria más restrictiva y a una política fiscal más austera, o podía suavizar los controles de precios, señalando así la aceptación de niveles moderadamente altos de inflación. La creciente oposición a las medidas de austeridad tanto de los trabajadores como del capital, junto con las presiones provenientes de los políticos del Partido Radical, obligaron a los técnicos heterodoxos a elegir la segunda opción.¹¹

¹¹ La UIA y el sector privado en general probablemente preferían la primera opción. Respecto de la lucha en torno a la participación del ingreso, la UIA comentó: "en momentos anteriores, la inflación posibilitaba disimular el empobrecimiento colectivo por medio de la ilusión de recuperaciones transitorias de ingresos al costo de una tendencia inexorablemente creciente de (reactivación de la espiral inflacionaria)... en estas condiciones se ha terminado cualquier (otra) posibilidad de distribución". Véase UIA (1986a).

3. *Modesta recuperación económica con relativa estabilización (abril de 1986 - enero de 1987)*

En abril de 1986, Sourrouille anunció importantes modificaciones al Plan Austral, que se centraban en la sustitución del anterior sistema de controles rígidos de precios por un nuevo esquema de precios "administrados". También se abandonaron las tasas de cambio fijas por un retorno al sistema de evaluaciones periódicas. La flexibilización de los controles provocó inmediatamente una aceleración de la inflación. En el tercer trimestre de 1986, el promedio de índices de precios al mayoreo y al consumidor habían ya crecido a una tasa mensual de 7.6%. El déficit presupuestario también aumentó, se deterioró la balanza comercial y la promesa del presidente de acelerar la privatización se estancó en el Congreso, el cual continuó resistiéndose a vender las empresas estatales.

Al apoyarse en los controles flexibles tuvo algún éxito: luego de un período de estancamiento, el PIB aumentó en 11% y la producción industrial en más de 26% durante los doce meses anteriores a septiembre de 1986. La inversión en maquinaria y equipo aumentó en casi 35% durante el mismo período. La inflación de junio de 1985 a junio de 1986 fue de sólo 50.1% (Frenkel y Fanelli, 1987). Sin embargo, estos logros probaron ser bastante transitorios debido a que, como lo señalaron los críticos ortodoxos, se había hecho muy poco para atacar las causas profundas estructurales de las presiones inflacionarias. Sin grandes transformaciones estructurales, la "inflación reprimida", combinada con subsidios de inspiración keynesiana sólo sirve para exacerbar los conflictos distributivos que impulsan a la espiral inflacionaria hacia nuevas alturas.

Estos problemas se reconocieron en septiembre de 1986, cuando Sourrouille impuso restricciones monetarias para mantener la estabilidad de precios. La nueva introducción de controles de precios más rigurosos vino también aparejada con el anuncio de los planes para reformar el sistema financiero, atraer nuevas inversiones extranjeras, promover las exportaciones industriales y llevar a cabo la privatización de varias empresas estatales. En el terreno fiscal, se redoblaron los esfuerzos para atacar un nivel de evasión fiscal extraordinariamente alto, el cual, según muchos es el verdadero "deporte nacional" de Argentina.¹²

Estos cambios de política tuvieron diferentes resultados. La inflación disminuyó ligeramente a fines de 1986, pero los precios aumentaron nuevamente en un promedio de 7.4% durante los primeros tres meses de 1987. El déficit del sector público disminuyó de 5.4% del PIB en 1985 a 4.1% en 1986, aunque esta cifra aún se excedía en el doble del objetivo acordado con el FMI. La disminución de 20% en los términos comerciales de Argentina creó presiones cada vez mayores sobre la balanza de pagos y el nivel de reservas internacionales (Banco Central, 1987: cuadro 1).

¹² En 1984, sólo existían tres millones de contribuyentes registrados, de los cuales, sólo 32.7% se molestaba en hacer declaraciones y de éstos, sólo 13% pagaba impuestos. *Latin American Regional Reports: Southern Cone*, 1986.

También se obtuvieron resultados positivos: el PIB tuvo una recuperación en 1986 y creció en un 5.4%. Sin embargo, eran evidentes los signos de una desaceleración. El sector estratégico manufacturero clave era particularmente volátil, ya que luego de crecer un 26.5% en el tercer trimestre de 1986, el crecimiento industrial cayó a sólo 2.7% en el primer trimestre de 1987. La inversión interna fija aumentó en 18% en 1986, pero ya para fines de ese mismo año mostraba una tendencia a la baja. La expansión económica había logrado poco en cuanto a la reducción del desempleo y el subempleo, los cuales, como se muestra en el cuadro 4, alcanzaron niveles récord durante el primer trimestre de 1987.

Cuadro 4.
DESEMPLEO Y SUBEMPLEO
(En la capital federal y la zona metropolitana de Buenos Aires)

	Desempleo		Subempleo		Total	
	Abril	Oct.	Abril	Oct.	Abril	Oct.
1975	2.4	2.8	4.7	4.9	7.1	7.7
1976	4.8	4.0	4.7	5.0	9.5	9.0
1977	3.4	2.3	3.3	3.1	6.7	5.4
1978	3.9	1.9	5.4	3.0	9.3	4.9
1979	2.0	2.1	3.2	3.2	5.2	5.3
1980	2.3	2.3	4.7	4.5	7.0	6.8
1981	4.0	5.0	4.6	5.8	8.6	10.8
1982	5.7	3.7	6.4	5.6	12.1	9.3
1983	5.2	3.1	4.6	4.9	9.8	8.0
1984	4.1	3.6	4.5	4.7	8.6	8.3
1985	5.7	4.9	5.5	6.6	11.2	11.5
1986	4.8	4.5	6.4	6.3	11.2	10.8
1987	5.4	5.2	8.0	7.8	13.4	13.0
1988	6.3	5.7	7.7	7.4	14.0	13.1
1989	7.7		8.3		16.0	

FUENTE: INDEC, *Boletín Estadístico Mensual*, varios números.

El movimiento obrero organizado reaccionó ante la baja en los salarios y el aumento en el desempleo, con una escalada de su retórica antigubernamental, demandando, entre otras cosas, el fin a las negociaciones con el FMI y la moratoria al pago de la deuda externa. Sin embargo, detrás de la militancia de la CGT, la tónica era la cautela, particularmente en la utilización de las huelgas, cuyo número disminuyó (ver cuadro 3) durante el primer semestre de 1987. Esta cautela sin duda fue motivada por el hecho de que el movimiento laboral se encontraba profundamente dividido por rivalidades personales, conflictos ideológicos y diferencias en la negociación sindical en todos los sectores económicos (Palomino, 1987; Gaudio, 1986; Gaudio y Domeniconi, 1986).

El gobierno aprovechó, y de hecho a menudo promovió, la fragmentación política de los trabajadores. Por ejemplo, la Junta Coordinadora (constituida por los principales "operadores" políticos de Alfonsín) pretendía crear una vanguar-

dia pro-gobierno al interior del movimiento laboral dominado por los peronistas. Esta estrategia tuvo un éxito considerable. El ganar la aceptación tácita de los sindicatos individuales permitió a las autoridades económicas aplicar gran parte del Plan Austral a pesar de la fuerte oposición de la CGT.¹³

Las relaciones con el sector privado se volvieron cada vez más complejas durante 1986. Motivada por una recesión en el sector agrícola (el PIB del sector fue de -2.8% en ese año), la Sociedad Rural (SRA) y otras organizaciones que representaban los intereses agrarios, llevaron a cabo protestas y manifestaciones públicas sin precedentes (*jornadas de protesta agropecuaria*) para expresar su desacuerdo. Una de las principales críticas de los productores rurales era el favoritismo del gobierno hacia los intereses industriales y su propia falta de representación en el proceso de creación de políticas (Acuña y Gobert, 1989: 21).

La Unión Industrial (UIA) condenó enérgicamente la incapacidad para controlar el déficit y la persistencia de los controles de precios. Los intereses industriales también se sentían poco satisfechos con la reticencia de Alfonsín por adoptar una posición más firme en sus relaciones con los sindicatos. Para fines de 1986, la UIA argumentaba que el propio Plan Austral tenía serios problemas y que se requería un modelo de crecimiento totalmente nuevo para superar la actuación errática de la economía y revertir la "pobreza estructural" del país (UIA, 1986b: 13, 15-16, 17-24).

4. *Nuevos aliados empresarios y trabajadores y la búsqueda de un nuevo modelo de crecimiento (febrero de 1987 - septiembre de 1987)*

En enero de 1987, Argentina nuevamente había dejado de cumplir los objetivos del FMI y era evidente que las presiones monetarias no estaban teniendo el resultado esperado. La respuesta de Sourrouille, emitida el 25 de enero, fue la imposición de una nueva escalada de impactos heterodoxos. El "Australito", como se nombró al nuevo plan, incluía la imposición de otro congelamiento "temporal" de precios y salarios que seguiría en efecto hasta el 30 de junio.

El Australito no alcanzó a despegar. Los grupos agroexportadores y las grandes empresas industriales argentinas y transnacionales especularon fuertemente contra la moneda local. Para contrarrestar esta fuga hacia el dólar, las autoridades monetarias del Banco Central se vieron obligadas a impulsar las tasas de interés a nuevas alturas. Al peligrar sus reservas de monedas duras, el gobierno llegó a mediados de abril a un acuerdo con el consorcio de bancos internacionales y el FMI para refinanciar las dos terceras partes de su deuda externa, posponiendo los

¹³ Por supuesto, esto tuvo dos resultados. Los sindicatos fuertes lograron negociar acuerdos salariales más favorables. Por ejemplo, a mediados de 1986, la presión del gobierno sobre las empresas del sector metalúrgico fue clave para lograr un acuerdo salarial con la poderosa Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que sobrepasó significativamente las metas salariales oficiales, contribuyendo así a las presiones inflacionarias y dañando al mismo tiempo la confianza empresarial en las autoridades económicas. Véase Acuña y Golbert, 1989, pp. 39-46.

nuevos pagos al capital hasta 1992. Las autoridades también se vieron obligadas a aceptar propuestas de *swaps* de deuda por inversiones para la capitalización de la deuda externa.

El Australito distorsionó aún más los precios relativos y, de hecho, exacerbó los conflictos distributivos. Los aumentos en los precios durante el primer semestre de 1987 sobrepasaron la tasa de inflación proyectada para todo el año. Aunque la inversión interna bruta fija siguió siendo bastante alta, el crecimiento económico se desaceleró hasta un promedio de sólo 2.6% durante el primer semestre, y el déficit presupuestal siguió excediendo los objetivos del FMI. En junio de 1987, preocupados por las elecciones parlamentarias que tendrían lugar en septiembre, el gobierno abandonó calladamente las políticas monetarias y salariales poco populares del Australito.

En julio de 1987, luego de la defunción del Australito, el gobierno de Alfonsín inició cambios importantes en su estrategia económica. Primero, las autoridades firmaron una nueva carta de intenciones con el FMI con objetivos de actuación ajustados. Posteriormente, Sourrouille prometió ir más allá de la estabilización monetaria y llevar a cabo “modificaciones estructurales” de largo alcance de la economía política argentina (Sourrouille, 1989: 80-86; Paz, 1989).

Aunque mantuvo algunas de las tendencias clave de la novedosa heterodoxia de 1985, el cambio que ocurrió en la estrategia subrayaba temas frecuentemente relacionados con la ortodoxia monetaria neoliberal. Este importante alejamiento del dogma del Partido Radical (que Sourrouille nunca compartió), fue motivado, en parte, por una evaluación pesimista de la capacidad del Estado para superar los obstáculos estructurales y lograr una estabilización y una reforma económica más amplia. En ese momento, Sourrouille pareció estar de acuerdo con los políticos conservadores y los economistas ortodoxos, cuando declaró que la culpa de los problemas económicos de Argentina la tenía la crisis de un “modelo populista y *facilista*” excesivamente centralizado y estatizado, que permitía que los poderosos intereses sectoriales que operaban “desde dentro y fuera del aparato de Estado [...] se resistieran a las transformaciones exigidas por la sociedad argentina” (Sourrouille, 1989: 80-86).

Para poder reorganizar este “modelo populista”, obsoleto, Sourrouille propuso tres objetivos fundamentales. Primero, se argumentaba que el Estado, el cual había sido el protagonista principal en la promoción de la industrialización, se había convertido en un gran obstáculo para la reestructuración económica que se requería hacía mucho tiempo. Desde este punto de vista, la intervención estatal excesiva fue responsable de las empresas públicas ineficientes y de un sector privado dominado por empresas monopólicas y oligopólicas poco dadas a la innovación tecnológica y la eficiencia económica. El equipo de Sourrouille esperaba que la desregulación de los mercados y la privatización y/o “desmonopolización” de las empresas públicas, convertiría a la lógica del mercado en una fuerza impulsora de los empresarios para que asumieran la responsabilidad principal de la inversión y el crecimiento futuros.

Segundo, de acuerdo con el equipo económico, el mercado de capitales argentinos, pequeño y altamente ineficiente, fomentaba la especulación y las orientaciones hacia la optimización de las ganancias a corto plazo. El objetivo del gobierno era crear el contexto institucional apropiado para acelerar la transición hacia una perspectiva más a largo plazo de los inversionistas. Ello se lograría mediante la promoción de la bolsa de valores de Argentina, una fuente de inversión de capitales poco aprovechada. Al mismo tiempo, mediante la reducción de la tasa de redescuento y el encaje de reservas obligatorias, y buscando la desregulación de las tasas de interés, las autoridades también pretendían fortalecer la capacidad de préstamo de los bancos privados.

La apertura de la economía semiautárquica de Argentina y su mayor integración a los mercados mundiales, fue el tercer objetivo principal del equipo económico. La manufactura y las exportaciones agrícolas debían aumentar sustancialmente por medio de incentivos promocionales dirigidos hacia industrias como la del acero y los petroquímicos (Azpiazu, Bisanga y Kosacoff, 1988). Aunque el sector privado debía tomar la iniciativa, la apertura económica también requeriría de inversiones públicas para la modernización de las comunicaciones, el transporte y la infraestructura básica deteriorados. Los acuerdos de integración regional, firmados en 1986 con Brasil y Uruguay, incluyendo las propuestas para facilitar las empresas conjuntas, reducir los impuestos a la exportación y los derechos a la importación, y promover la cooperación científica y tecnológica, resultaban pasos muy importantes en este sentido.

El viraje neoliberal del equipo de Sourrouille en la estrategia económica, allanó el camino hacia una alianza *sui generis* de conveniencia con el sector privado. El interés renovado en las negociaciones con el "Grupo María" hizo que muchos estrategas políticos de confianza de Alfonsín, así como miembros clave del equipo económico, se acercaran a los principales "capitanes de la industria", que representaban a los conglomerados agrícolas, industriales, financieros y comerciales más poderosos de Argentina. La clave del poder económico y político detentado por estos grupos era su amplia liquidez financiera y la diversificación de sus carteras, lo que les permitía repartir sus riesgos y al mismo tiempo obtener ganancias jugosas de las oscilaciones frecuentes y rápidas de los precios relativos.

Estas características hacían que los "capitanes" fueran aliados indispensables en el esfuerzo por cambiar el comportamiento microeconómico de la clase empresarial argentina, objetivo clave para el proyecto de reconversión industrial que el equipo de Sourrouille paulatinamente imponía. La necesidad del gobierno de generar grandes excedentes comerciales que permitieran cubrir el servicio de la deuda, coincidía con los intereses de ciertos "capitanes" y grupos económicos, muchos de los cuales incluían en la estructura de sus conglomerados, plantas agroindustriales y manufactureras modernas capaces de competir en los mercados mundiales.

Esta coincidencia parcial de intereses y objetivos hacía que cualquier pacto social formal resultara superfluo. De hecho, para Alfonsín y Sourrouille, resultaba tal vez más conveniente evitar las molestas formalidades de un pacto social y, en

lugar de ello, negociar el cumplimiento de las políticas oficiales con el sector privado mediante la concesión del acceso a la creación de políticas especiales a la élite de la clase empresarial transnacional argentina. Aunque esos acuerdos informales enajenaban claramente a los líderes de algunas de las principales organizaciones empresariales, el viraje del equipo económico hacia un discurso ideológico anties-tatal, de libre empresa, neutralizaba cualquier oposición del sector privado.¹⁴

La alianza informal con los “capitanes” se complementó con los esfuerzos redoblados de los operadores políticos de Alfonsín en la Junta Coordinadora, por ganar aliados entre las élites clave de los trabajadores. El objetivo inmediato era dividir al movimiento laboral controlado por los peronistas, antes de las elecciones parlamentarias que se celebrarían en septiembre de 1987. En lugar de buscar interlocutores entre los *renovadores* (el ala democrática reformista del peronismo, encabezada por Antonio Cafiero), los estrategas de Alfonsín dirigieron sus esfuerzos hacia un grupo de dirigentes sindicales influyentes, y generalmente conservadores, pertenecientes al “Grupo de los 15”. Esta maniobra tuvo como resultado el nombramiento de Carlos Alderete como ministro del Trabajo en abril de 1987 (Palomino, 1987). Entonces, además de los “capitanes de la industria”, el personal político y el equipo económico incorporaron a su círculo de interlocutores privilegiados a un grupo de poderosos “capitanes sindicales”, quienes controlaban el sector antirreformista del movimiento laboral peronista.

La incorporación del “Grupo de los 15” al gobierno tuvo sus costos. Los ásperos conflictos en torno a la política monetaria y a una nueva ley de negociación colectiva más favorable a los trabajadores, enfrentaron a Sourrouille y a Carlos Aldrete. Con la creciente desorganización de los círculos internos del gobierno, una resistencia en aumento por parte de la CGT y el sector privado hicieron que se derrumbaran los lineamientos oficiales sobre precios y salarios. Alentadas por la especulación monetaria, las tasas de interés aumentaron y la inflación se aceleró, promediando 12% durante el período de julio a septiembre. El crecimiento y la inversión decayeron y el desempleo y el subempleo continuaron empeorando (véase cuadro 4).

El rechazo de los electores frente al manejo de la economía fue una de las principales causas de la derrota electoral de los radicales en septiembre de 1987: los peronistas obtuvieron el 41.5% de los votos, frente al 37.4% de los radicales, y acapararon todas las gubernaturas menos dos. Sourrouille presentó su renuncia, pero el presidente Alfonsín reiteró vigorosamente su total confianza en el equipo económico y sus políticas. Alderete renunció como ministro del Trabajo, pero los “capitanes sindicales” continuaron negociando concesiones con el gobierno.¹⁵

¹⁴ El caso de la Unión Industrial es ilustrativo. Después de un breve período de relaciones un poco más ásperas, la posición de la UI se volvió notablemente más conciliatoria respecto de la política oficial. Véase el discurso del presidente de la UIA, Eduardo de la Fuente, respecto del “Día de la industria” (UIA, 1987: 39-46).

¹⁵ Con Alderete en la Secretaría del Trabajo, la CGT y la UIA realizaron un nuevo intento para llegar a un pacto social. Aunque este esfuerzo fracasó, se negoció directamente un acuerdo con Sourrouille

De esta manera se ratificó la alianza con las élites poderosas de los sectores privado y laboral; sin embargo, la derrota en las urnas dejó a Alfonsín y al equipo de Sourrouille cada vez más aislados dentro del Partido Radical y gradualmente sin apoyo público para sus políticas económicas.

5. *El ocaso de la heterodoxia (octubre de 1987 - julio de 1988)*

La recepción, a mediados de octubre, de un préstamo puente de 700 millones de dólares del Tesoro de Estados Unidos, coincidió con el anuncio de otro acuerdo con el FMI y la aplicación de un nuevo tratamiento de choque a la tambaleante economía argentina.¹⁶ Al forzar una disminución importante en los salarios reales (véase cuadro 5), el “nuevo” paquete pretendía reducir el déficit presupuestario y lograr una apariencia de estabilidad en los precios. Los principales instrumentos de política económica consistían en el congelamiento en los precios de la mayoría de los bienes y servicios, junto con aumentos de entre 40 y 60% en las tarifas del sector público. Luego de un aumento del 12%, los salarios de los sectores público y privado se congelaron hasta finales de ese año. Se propusieron nuevas reformas fiscales e impositivas, incluyendo un plan de dos años de “ahorro forzado”, junto con una mayor desregulación de los mercados financieros y planes para la privatización de empresas públicas tan importantes como la compañía telefónica ENTEL y la empresa estatal aérea Aerolíneas Argentinas (para obtener mayores detalles, véase Banco Central, 1988).

Este último tratamiento de choque fue aún menos exitoso que los anteriores intentos. La aceleración de los precios al consumidor de 36.3% durante el último trimestre de 1987, erosionó considerablemente los salarios reales y el poder adquisitivo de los asalariados. La inflación alcanzó para ese año el 174.8%, más del doble de la cifra del año anterior. El crecimiento del PIB fue de sólo 1.6%. En 1987, la crisis fiscal del Estado también empeoró con un déficit de 7.3% del PIB, lo cual representa un aumento del 70% con respecto del año anterior (Banco Central de la República Argentina/Ministerio de Economía, 1988).

Al exacerbar el patético comportamiento global de la economía, el equipo de Sourrouille debió enfrentar un importante revés político en diciembre de 1987. Alfonsín y la Junta Coordinadora decidieron, a pesar de las objeciones de Sourrouille, cumplir con el acuerdo para la aprobación de una nueva Ley de Asociaciones Profesionales, al que se había llegado con el “Grupo de los 15” durante el breve paso de Alderete por el Ministerio del Trabajo. La aprobación parlamentaria de la nueva ley abrió el camino a negociaciones colectivas libres entre patrones

para abandonar el congelamiento de los precios y salarios y retornar a la política de lineamientos administrados. Véase Palomino (1987) y Acuña y Golbert (1989, pp. 36-37).

¹⁶ Paradójicamente, un importante aumento esa misma semana en las tasas de intereses en Estados Unidos, se tradujo en pagos de intereses mucho más altos a la deuda externa argentina, lo que desequilibró el préstamo puente. Véase Paz (1989, p. 97).

y empleados, sin necesidad de acuerdos de topes salariales impuestos por el gobierno. El equipo económico perdió así uno de sus instrumentos clave de control macroeconómico, es decir, las restricciones a los salarios. De esta manera, se creó el escenario de nuevas demandas provenientes del movimiento obrero organizado en el plano salarial (Thompson, 1988b, *El bimestre político y económico*, 1988).

Estos nuevos obstáculos internos a la formulación de políticas macroeconómicas fueron reforzados por restricciones externas cada vez mayores. La balanza comercial de Argentina en 1985 y 1986 alcanzó excedentes de 4 600 millones y 2 100 millones de dólares, respectivamente. Sin embargo, en 1987, impulsado por el aumento en las importaciones y la disminución en las exportaciones, el excedente comercial se redujo a sólo 500 millones de dólares. En febrero de 1988, Sourrouille se vio obligado a firmar una nueva carta de intención con el FMI, especificando estrictas medidas de austeridad que incluían la promesa de disminuir la inflación a una tasa de 4% para fines de ese mismo año. Sin embargo, en la práctica, a partir de abril de 1988, Argentina suspendió todos los pagos de interés de su deuda a los bancos comerciales.

Un desastre siguió a otro. La liberalización de los controles de precios y salarios y el retorno a la negociación colectiva libre, además de los continuos aumentos en las tarifas del sector público, dieron nuevo ímpetu a los conflictos distributivos. A mediados de 1988, la inflación estaba fuera de control, con precios que aumentaron 25.6% en julio y 27.6% en agosto. Todos los grupos intentaron defender, y de ser posible mejorar sus precios frente a los de otros grupos. Los principales grupos industriales y financieros, así como las agrupaciones de agroexportadores, aprovecharon la benevolencia del gobierno para utilizar su poder oligopólico y realizar enormes transferencias de ingresos a su favor, cosechando al mismo tiempo las ventajas de nuevas oportunidades de especulación monetaria. El aumento en la agitación laboral resultó inútil para proteger el cada vez menor poder de negociación de los trabajadores; el desempleo creciente, el reducido poder de compra y los mercados disminuidos, impusieron enormes pérdidas de ingresos absolutos y relativos a los trabajadores sindicalizados, a sectores no organizados de la clase media, a las agrupaciones comerciales y a empresas competitivas del sector manufacturero que dependían del consumo masivo. El cuadro 5 nos da una idea de la magnitud de la pérdida de ingresos y poder adquisitivo, en relación con el aumento en los conflictos de distribución.

Cuadro 5
SALARIOS Y PODER DE COMPRA REALES

	Salarios reales dic. 83=100	Inflación mensual promedio	Poder de compra dic. 83=100	Variación del poder anual de compra (%)
1983	93.4	15.0	104.5	23.5
1984	112.4	18.8	123.3	18.0
1985	90.3	14.1	101.6	-17.4
1986	92.2	5.1	109.0	7.4
1987	86.7	8.8	100.4	-7.9
1988	82.5	14.1	92.8	-7.6
1987				
Ene.	85.7	7.0	99.1	-2.4
Feb.	85.1	7.4	97.0	-8.8
Mar.	82.5	5.8	96.3	-5.7
Abr.	86.6	3.8	96.7	-2.5
May.	96.4	6.1	99.8	-3.5
Jun.	90.1	9.1	107.3	-5.7
Jul.	87.9	11.9	97.7	-2.4
Ago.	85.1	12.7	93.4	-14.8
Sept.	91.3	15.6	89.8	-17.6
Oct.	88.9	14.8	93.5	-12.6
Nov.	81.6	6.8	99.1	-13.0
Dic.	83.4	6.2	94.3	-8.4
1988				
Ene.	83.6	9.8	92.0	-7.2
Feb.	79.3	12.6	90.2	-7.0
Mar.	86.1	16.0	82.4	-14.5
Abr.	78.3	16.5	88.2	-8.8
May.	86.2	16.8	80.6	-19.2
Jun.	82.2	21.7	85.8	-20.0
Jul.	77.2	26.6	77.4	-20.8
Ago.	67.8	19.4	74.8	-20.8
Sept.	80.8	10.3	83.4	-7.1
Oct.	82.6	7.3	90.4	-3.4
Nov.	87.0	6.3	94.4	-4.8
Dic.	86.6	7.9	98.0	-3.9
1989				
Ene.	86.2	9.3	95.8	4.2
Feb.	81.6	13.2	93.0	3.1
Mar.	75.3	24.9	80.2	-2.7
Abr.	75.3	54.3	63.7	-27.8
May.	83.1	98.2	63.8	-20.9
Jun.	—	150.4	44.4	-48.2

FUENTE: FIEL, *Indicadores de coyuntura*, varios números. Véase que los cálculos de salarios e inflación difieren ligeramente de los datos oficiales de INDEC debido a variaciones menores en la metodología.

Al deteriorarse la situación, el sector privado cerró filas. Consecuencia de ello fue la creación de una amplia coalición de organizaciones empresariales conocida como el “Grupo de los 17”. La política que invocaba la agrupación opositora más radical de esta coalición era la propuesta de un gran “choque fiscal” para equilibrar las finanzas públicas. La crítica mordaz de la Unión Industrial al “sesgo antiinversionista” del paquete de reformas fiscales, se cristalizó en un sentimiento

general de hostilidad en la comunidad empresarial. El consejo general de la UIA afirmó que este episodio era tan sólo el último ejemplo de las “repetidas frustraciones” que habían contribuido a destruir la credibilidad en el gobierno. Es importante señalar que con un apoyo que disminuía incluso en el interior del Partido Radical, el gobierno no logró impedir que los cabildos de los empresarios en el Congreso diluyeran las propuestas originales del equipo económico en pro de medidas fiscales estrictas.¹⁷

El aumento en la tensión de las relaciones con la clase empresarial y los sindicatos durante los primeros meses de 1988, junto con la cancelación de los préstamos pendientes del FMI y la creciente fuga de capitales, dejó al gobierno con muy poco espacio de maniobra. Y para empeorar la situación, la creciente desesperación provocada por encuestas que favorecían al candidato peronista en las elecciones presidenciales que se avecinaban (en mayo de 1989), despertaron el clamor del Partido Radical para que Alfonsín hiciera algo, lo que fuera, por controlar la economía.

6. *El “Plan Primavera” y el colapso final (agosto de 1988 - julio de 1989)*

En respuesta a estas presiones, el 3 de agosto de 1988 Sourrouille anunció el llamado “Plan Primavera”, la última y desesperada carta de Alfonsín por redimir su imagen y mejorar las perspectivas del Partido Radical en la campaña presidencial. Los autores del plan argumentaron que la única solución al *impasse* económico de Argentina era obligar al paciente a tragar dosis aún más masivas de ortodoxia monetarista. En un lenguaje desusadamente directo para un documento oficial, el equipo económico responsabilizaba del empeoramiento de la crisis a la fraccionada sociedad civil argentina. Se culpó tanto a los intereses de los productores como de los sindicatos de impedir los cambios urgentes “no sólo en las políticas, sino también en las instituciones y comportamientos profundamente enraizados”. Al parecer sin importar las consecuencias electorales, Sourrouille y sus colaboradores tecnócratas también sermoneaban a los argentinos en el sentido de que para que fueran evidentes los beneficios de la estrategia del gobierno, se requeriría de un período prolongado de austeridad y sacrificios (Ministerio de Economía, 1988, p. 12; *The Argentine Letter*, 1988a).

El Plan Primavera dependía vitalmente del importante apoyo político y económico recibido de la banca acreedora extranjera y de las instituciones de crédito multilaterales. Sin embargo, la suspensión de los pagos de intereses a la deuda externa argentina en abril de 1988, además de los repetidos fracasos para alcanzar las metas de actuación del FMI, habían erosionado profundamente la confianza de la comunidad financiera internacional en un gobierno debilitado casi al

¹⁷ Véase la declaración de la UIA del 23 de octubre de 1987 y el texto de las propuestas de ésta a la Cámara de Diputados, solicitando modificaciones al sistema fiscal, ambas reproducidas en UIA (1987, pp. 53-63).

final de su mandato. Por consiguiente, aunque dieron la bienvenida al Plan Primavera, los actores extranjeros se sentían justificadamente escépticos acerca de la capacidad de Sourrouille para poner en práctica sus reformas antiestatales y en pro del mercado. No obstante, decidieron darle la oportunidad de probarse.

El Tesoro de Estados Unidos aprobó un préstamo puente de 500 millones de dólares, el cual abrió camino para el otorgamiento de nuevos fondos por parte de los acreedores internacionales de Argentina, por un monto de 1 500 millones de dólares y garantizando la recepción de nuevos préstamos de contingencia por 1 200 millones más del FMI. El Banco Mundial también prometió nuevos préstamos y créditos. La disponibilidad de reservas en monedas duras envalentonó al equipo económico, que jugó las escasas fichas que le quedaban en el mantenimiento de una tasa de cambios estable y sobrevaluada para el austral. Aunque esto implicaba un fuerte prejuicio contra la exportación, un austral fuerte parecía fundamental para revivir la confianza de los consumidores y el sector privado e impedir la explosión inflacionaria (*The Argentine Letter*, 1988b; *Clarín*, 1988a). Sin embargo, aun con este apoyo externo, el equipo de Sourrouille se vería en dificultades para cambiar la incertidumbre política y económica que se profundizaba cada día más.

Aunque el presidente alabó el Plan Primavera calificándolo de “alianza entre producción y democracia” (*Clarín*, 1988a), la decisión del Congreso de afirmar sus prerrogativas de supervisar y aprobar las políticas del gobierno, obstaculizó su aplicación. La aceptación de este desafío llevó al gobierno de Alfonsín, ya considerablemente debilitado, a recurrir a lo que la Unión Industrial calificó correctamente de “carrera final”, para sacarle la vuelta al proceso legislativo (UIA, 1988, p. 21). En primer lugar, las autoridades negociaron una “tregua” de precios temporal de 180 días (aunque sólo se habían acordado explícitamente los primeros 60) con la UIA y la Cámara Argentina de Comercio (CAC), mientras que la SRA, las asociaciones bancarias y otros grupos representativos del capital que se negaban a participar (*Ámbito Financiero*, 1988; *Clarín*, 1988b; *Clarín*, 1988f). En segundo lugar, valiéndose de sus poderes de decreto ejecutivo, el equipo económico introdujo un mercado de cambios doble. En tercer lugar, utilizando nuevamente su autoridad ejecutiva, aumentó los impuestos a las exportaciones primarias, para capturar una cantidad mayor de divisas extranjeras en las arcas casi vacías del Banco Central (Banco Central de la República Argentina/Ministerio de Economía, 1988).

Durante los primeros meses del Plan Primavera la inflación efectivamente disminuyó de manera significativa, con aumentos a los precios al consumidor que pasaron de 27.6% en agosto a 5.7% en noviembre. Sin embargo, no es sorprendente que ni los decretos ejecutivos, ni los pactos improvisados (particularmente aquél que excluía a los sindicatos) pudieron abolir los conflictos distributivos (*Clarín*, 1988c). Las agrupaciones agroexportadoras, los grandes grupos industriales y los individuos pudientes apostaron a que el gobierno no podría seguir vendiendo dólares baratos indefinidamente y a que era inevitable una nueva devaluación importante de la moneda local, por lo que compraron millones de dólares en un frenesí de especulación. De hecho, en unas cuantas semanas, el Banco

Central vendió cientos de millones de dólares en el mercado libre de divisas, en un vano intento por sostener la tasa de cambios. El resultado neto fueron subsidios masivos del gobierno a la fuga de capitales y tasas de interés a corto plazo disparadas que ahogaron cualquier inversión y profundizaron las tendencias recesionistas, ya para entonces bastante fuertes.¹⁸

Finalmente, a principios de febrero, con unas reservas internacionales virtualmente agotadas, el Banco Central anunció que ya no vendería dólares en el mercado libre. Adolfo Canitrot, entonces viceministro de Economía, ofreció el siguiente recuento gráfico:

El 6 de febrero nos atropellaron. En los últimos diez días de enero [el equipo económico] observó señales claras de que gran número de empresas, algunas multinacionales, habían comenzado a comprar dólares en masa. Una sola empresa compró 700 *palos* [700 000 dólares] en un día y todo se vino abajo. [El presidente del Banco Central José Luis] Machinea tuvo que cerrar la ventanilla del Banco Central y no vender ya más dólares, porque si los dejábamos seguir dos días más, se habrían llevado todo incluyendo las sillas (*Página/12*, 1989b).

Luego de esta debacle, el apoyo al equipo económico por parte de sus principales aliados nacionales —la UIA, la Cámara de Comercio y los “capitanes de la industria”— se evaporó rápidamente. Supuestamente, muchas de las empresas controladas por los “capitanes” se encontraban entre las más notables especuladoras y las que más desesperadamente aumentaban los precios al mayoreo y menudeo, violando los acuerdos anteriores.¹⁹ Simultáneamente, el equipo de Sourrouille también perdió a sus aliados externos. Al ya no poder subsidiar la especulación y la fuga de capitales, a principios de marzo el FMI y el Banco Mundial suspendieron el flujo de dólares hacia Argentina.

El Plan Primavera estaba muerto. Cuando la inflación mensual prácticamente se duplicó hasta alcanzar un 17% en marzo, Alfonsín finalmente cedió ante las fuertes presiones públicas del candidato a la presidencia del Partido Radical Eduardo Angeloz y aceptó reticentemente la renuncia de Sourrouille. Lo sustituyó el veterano del partido Juan Carlos Pugliese, presidente de los radicales en la Cámara de Diputados y ex ministro de Economía a mediados de la década de 1960. Sin embargo, era poco lo que podía hacerse. En abril, los precios al mayoreo aumentaron 58% y los precios al consumidor 33.4%; en mayo siguieron subiendo (se dispararon en un fantástico 104.5%) y los salarios casi se mantuvieron en el mismo nivel.

¹⁸ Aunque algunos radicales (Juan Carlos Pugliese mencionó “40 especuladores”) pensaban que existía una conspiración masiva para desestabilizar al gobierno de Alfonsín, la creciente incertidumbre política y la hiperinflación son suficientes para explicar el “veto de los ahorradores” a la política del gobierno. Véase la entrevista con Adolfo Canitrot (ex miembro del equipo de Sourrouille) en *Ámbito Financiero*, 1989.

¹⁹ Por ejemplo, el presidente de la UIA, Eduardo de la Fuente, atribuyó la “responsabilidad exclusiva” de las políticas “contraproducentes” únicamente al gobierno. Poco después, la UIA abandonó el comité oficial encargado de supervisar los precios. Véanse los comunicados de prensa núm. 347 (24 de febrero de 1989) y núm. 348 (28 de febrero de 1989), reproducidos en UIA, 1988, pp. 14-15. También consultar *La Nación* (1989).

A nadie sorprendió que el peronista Carlos Menem, cuya plataforma populista prometía un *salario* para ayudar a los desesperados trabajadores, derrotara fácilmente a Angeloz por un margen de 51.7% contra 39.2% en el recuento del 14 de mayo, en el que los peronistas también ganaron por un gran margen en las elecciones parlamentarias para diputados federales. Luego de las elecciones, la economía literalmente se desbarató. El dólar, siempre un barómetro confiable, que se cambiaba a 100 australes en la víspera de las elecciones, se disparó a 200 australes una semana después, llegando a 540 australes en junio de ese año.

Los trabajadores y la clase media observaban aterrorizados cómo a partir de fines de 1988 se evaporaban sus ahorros, y sus salarios y poder de compra caían en más de 50% (véase cuadro 5). A fines de mayo se extendieron las manifestaciones violentas por la falta de víveres y los ataques a los supermercados en los barrios de las clases trabajadoras, desde Córdoba y Rosario hasta el gran cinturón industrial que rodeaba la ciudad de Buenos Aires. Alfonsín sustituyó a Pugliese con el diputado radical Jesús Rodríguez, pero la situación ya no tenía remedio y a principios de junio se declaró el estado de sitio al aumentar el temor de que se cocinaba una insurrección popular masiva. Aunque sólo fuera por unos días, Argentina se encontraba virtualmente “sin Estado”: nadie sabía cuál era el valor de la moneda (los bancos y casas de cambio se encontraban “de vacaciones”) y, debido a que la policía y las fuerzas armadas no podían restaurar el orden, incluso el monopolio del gobierno sobre la coerción pareció poco eficaz.²⁰

La economía se dirigía vertiginosamente hacia la hiperinflación: los precios al consumidor se dispararon hasta 114.5 y 196.6% en junio y julio respectivamente. En el período comprendido entre el Plan Primavera y julio de 1989, los precios al consumidor aumentaron 3 610.2%, y al mayoreo, en 5 061.6%. La perspectiva de siete meses de caos total con un presidente débil en la Casa Rosada era intolerable para todos los sectores de la sociedad argentina, por lo que se llevó a cabo una transferencia de poderes rápida el 8 de julio de 1989. Junto con la banda presidencial, Raúl Alfonsín heredó al peronista Carlos Menem el peor colapso económico jamás conocido en la larga y trágica historia de desastres provocados por la mano del hombre en Argentina.

CONCLUSIONES

Una lectura benigna de la historia de formulación de políticas macroeconómicas durante la época de Alfonsín, podría concluir que las políticas heterodoxas aplicadas por Sourrouille y su equipo económico obtuvieron grandes éxitos, que

²⁰ Un artículo aparecido en el *Cronista Comercial* observó que el “fenómeno insurreccional” era producto de las condiciones “objetivas” producidas por la pobreza masiva y la hiperinflación, condiciones que provocaron la “disolución” de la autoridad del Estado. También señalaba que Alfonsín era un “presidente agotado sin autoridad alguna”. Citado en *El Bimestre Político y Económico* (1989).

casi seguramente evitaron los desastres sociales y económicos que podría haber provocado la continuación del keynesianismo ingenuo de Grinspun o la aplicación del estilo ortodoxo del FMI. Desde esta perspectiva, el Plan Austral resultó un logro político significativo que le dio al gobierno de Alfonsín la holgura que requería para fortalecer una cultura política más tolerante y promover la consolidación de instituciones democráticas aún frágiles. Esta interpretación es bastante real. Sin embargo, en este mismo sentido debe observarse que una vez que se había logrado controlar provisionalmente a la inflación, los “heterodoxos” no lograron ni una estabilización genuina ni una reactivación económica duradera. Este fracaso debe colocarse en la columna negativa de la evaluación.

De hecho, una interpretación menos optimista de los mismos acontecimientos y que centre su atención en la debacle del Plan Primavera, la hiperinflación subsecuente y la salida prematura e inesperada de Alfonsín de la Casa Rosada, plantea preguntas extremadamente problemáticas respecto tanto del malestar económico permanente en Argentina, como del futuro de sus instituciones democráticas. Los obstáculos externos resultaron prácticamente insuperables. El gobierno de Alfonsín, luego de su derrota de 1984 en el *chicken game* del FMI y la banca acreedora, fue testigo del aumento sin precedentes de más de 60 mil millones en la deuda externa. Con poco espacio para maniobrar, los radicales cedieron el poder a Menem y a los peronistas sin resolver las causas estructurales de una inflación muy alta y un crecimiento estancado. La crisis de la deuda sin resolver y la hemorragia imparable de los ahorros internos hacia el exterior, siguieron teniendo graves consecuencias para la inversión nacional, la cual ha venido disminuyendo continuamente de un promedio de 21.4% del PIB en la década de 1970, a 12.1% en 1988. Esto hizo imposible que Argentina se mantuviera a la par con el rápido ritmo de la reestructuración económica mundial, con lo cual quedaba cada vez más a la zaga de países como Brasil y México, además de los países de industrialización reciente del este de Asia. Los esfuerzos realizados por el equipo de Sourrouille para abrir a la economía argentina mediante el aumento de la competitividad del sector industrial, no lograron modificar sustancialmente la preferencia de los industriales por la seguridad de los mercados internos protegidos (López y Lugones, 1989). La crisis fiscal del Estado argentino siguió profundizándose. Además, el gasto público tomó cada vez más la forma perversa de transferencias masivas que subsidiaban a los grupos económicos más poderosos y mejor organizados.²¹

¿Qué tipo de modelo económico recibió Menem de los radicales? El continuo estancamiento económico presente en la época de Alfonsín y Sourrouille consolidó y de hecho profundizó la desindustrialización y reducción del mercado interno, iniciadas durante el régimen militar posterior a 1976. Esta grave con-

²¹ Al denunciar lo que se llamó “capitalismo asistido”, el gobierno de Alfonsín calculó estos subsidios en aproximadamente 4 000 millones de dólares, y señaló que esta cantidad era 2.75 veces el gasto del gobierno central en educación y siete veces el gasto en bienestar social, que absorbía mientras tanto el 23% del total de ingresos fiscales, 70% del total de inversión en el sector público y casi las dos terceras partes de todo el déficit del sector público. Véase Poder Ejecutivo Nacional/Ministerio de Economía (1989). También véase Franzé (1989).

clusión se aclara un poco más con el análisis del cuadro 6. Al comparar 1974 con 1983, se observa una disminución de -11.9% en la producción física del sector industrial; si se compara este último año con la cifra correspondiente en 1988, se observa un crecimiento insignificante de 0.6% en la producción. De manera similar, el número de trabajadores empleados en la manufactura disminuyó en -39.4% de 1974 a 1983, mientras que en el período 1983-1988 se registró una disminución pequeña pero significativa de -5.2%. Por supuesto, la contrapartida de la reducción en el número de trabajadores calificados fue el tremendo aumento de la productividad laboral durante el régimen militar, seguido por una tasa menor de aumento durante los años de Alfonsín. El aumento en la productividad laboral, junto con la baja en las tasas de inversión y los costos laborales reducidos, tuvieron como resultado una gran transferencia de ingresos de los asalariados al capital (Marshall, 1989; Orsatti, 1989).

Cuadro 6
EVOLUCIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL, 1974-1988
(1970=100)

	Volumen físico de producción	Número de trabajadores	Productividad laboral	Horas trabajadas	Productividad del trabajo por hora	Salarios reales
	I	II	III=I/II	IV	V=I/IV	VI
% de variación 1983/1974	-11.9	-34.4	40.8	-34.6	31.9	—
% de variación 1988/1983	0.6	-5.2	11.9	-4.0	8.4	-7.2
1983	110.8	75.4	146.9	79.4	139.5	100.0
1984	113.8	77.6	146.6	80.2	141.9	123.3
1985	103.1	74.8	137.8	73.7	139.9	101.6
1986	115.9	71.7	161.6	74.4	155.5	109.0
1987	117.3	71.3	164.5	73.5	159.6	100.4
1988	111.5	70.2	158.8	75.4	147.9	92.8

FUENTE: Calculado de INDEC, *Boletín Estadístico Trimestral*, varios números.

La consolidación de los cambios estructurales producidos por el régimen autoritario posterior a 1976, tuvo profundas implicaciones para la justicia distributiva en un país que desde hacía mucho se enorgullecía de su distribución de ingresos relativamente equilibrada y la ausencia de pobreza extendida. El PIB per cápita en 1988 era 12% menor al de 1975 y aproximadamente el mismo que en 1959. El empobrecimiento relativo vino acompañado por desigualdades de ingresos cada vez mayores. Los salarios en 1975 representaron el 53.8% del PIB; en 1983, a fines del régimen militar, la cifra correspondiente fue de 41.0%. En 1988, después de cuatro años de democracia, los trabajadores y la clase media asalariada observa-

ron la caída de su participación en la riqueza nacional a sólo 30% del PIB (*Clarín Económico*, 1990: 5; Paz, 1989: 104).

Por supuesto, el otro lado de esta moneda fue la creciente concentración de la riqueza entre los grupos de ingresos más altos. En 1960, el 10% superior de los receptores de ingresos recibió el 39% del PIB, cifra baja para América Latina. Para 1974, esta cifra había disminuido a 35%, antes de ascender a 44% en 1980, gracias a las políticas del régimen militar. En 1988, el 10% superior recibió 46% del ingreso nacional, cifra mucho más cercana a la norma latinoamericana (Paz, 1989: 104).

Aunque el gobierno de Alfonsín ciertamente no es responsable del origen de la pobreza argentina, es cierto que fue poco o nada lo que sus políticas económicas y sociales lograron respecto de la solución de las necesidades básicas de los pobres en Argentina, un grupo que se estima incluye entre nueve y diez millones de personas en el país (*Página 12*, 1989a). En realidad, la pobreza empeoró bajo el régimen democrático. Por ejemplo, a mediados de 1988, en el conurbado bonaerense que comprende los 19 distritos del cinturón industrial de la capital federal de Buenos Aires, de una población total de casi 7.3 millones de personas, 36.7% de todos los hogares y 44.3% de la población vivían en la pobreza. De los hogares pobres, 31.3% se clasificaba como “estructuralmente pobres” (*v.g.* aquellos que experimentan graves problemas de vivienda, infraestructura social y cuyos ingresos no logran cubrir sus necesidades básicas), mientras que un total de 68.7% estaba “depauperado”. Estos “nuevos pobres” son las familias trabajadoras y de clase media que anteriormente habían tenido un estándar de vida razonable pero que, debido a la crisis económica prolongada del país, han sido lanzados hacia un tipo de pobreza que frecuentemente se confunde con la de los “pobres estructurales”.²²

Pasemos ahora a algunos temas sociológicos relacionados con los conflictos distributivos. El impulso neoliberal de la estrategia oficial posterior a mediados de 1987, plantea preguntas intrigantes acerca de las interacciones estratégicas quienes formulan las políticas, los empresarios y el movimiento obrero organizado. La decisión de los tecnócratas heterodoxos de reducir la intervención estatal resultó contraproducente. La paulatina subordinación de las políticas públicas a la lógica de los criterios del mercado sirvió para reforzar eficazmente el “veto del ahorrador”. Los especuladores y quienes promovían la fuga de capitales prosperaron. Los perdedores incluían a los consumidores, los trabajadores organizados, a sectores más débiles del capital y, por supuesto, al Estado.

El sector privado naturalmente dio la bienvenida a este cambio hacia una estrategia más orientada hacia el mercado. Sin embargo, los empresarios se sentían notablemente reticentes a modificar sus expectativas de comportamiento para cumplir con las pretensiones del proyecto del gobierno para la reconversión industrial. En lugar de ello, los sectores empresariales dominantes utilizaron su poder de veto para aumentar sus exigencias, demandando que la retórica antiestatal

²² Véase Estudios INDEC (1989, pp. 7-20, 25). Según el mismo estudio, el número de “pobres estructurales” disminuyó significativamente desde la década de 1970, mientras que el número de “pobres depauperados” aumentó en casi ocho veces durante el mismo período.

se concretara inmediatamente en acciones, particularmente la reducción del déficit fiscal, el fin de los controles de precios y una mano más dura para tratar a los sindicatos.

Sin embargo, los tecnócratas heterodoxos no pudieron cumplir inmediatamente con las demandas del sector privado. Sourrouille y su equipo se vieron obligados a funcionar en el contexto de reglas democráticas, permaneciendo leales a un presidente (y en segundo lugar a un partido) cuya legitimidad dependía de concursos electorales periódicos. Los políticos y quienes toman las decisiones políticas del Partido Radical se hallaron así ante una encrucijada. La insistencia de los impactos heterodoxos cada vez menos eficaces y que finalmente culminaron en el desastroso Plan Primavera, socavaron la confianza en las políticas oficiales y alentaron, sin darse cuenta, el comportamiento del tipo *free-riding* por parte del sector privado y los sindicatos. Naturalmente, esto sirvió para alimentar los conflictos distributivos que empeoraban, con el aparentemente inexorable resultado de la hiperinflación. Con la destrucción de la popularidad y credibilidad de sus líderes, los radicales pagaron el precio en las urnas.

¿Acaso este resultado era inevitable? ¿Podían Alfonsín y los radicales haber seguido una agenda más “reformista”, congruente con sus inclinaciones democráticas? ¿Por qué se desvaneció el entusiasmo popular inicial por el Plan Austral, pasando primero por la desesperación para terminar con el rechazo? En retrospectiva, tal vez puede acusarse al gobierno de Alfonsín de timidez para enfrentar los obstáculos externos e internos. Un liderazgo más audaz podría haber intentado crear nuevas coaliciones e instituciones políticas para canalizar el apoyo popular en pro de un programa de reformas sociales y económicas. Debía haberse puesto en práctica al principio, cuando la memoria popular de la victoria sobre la inflación estaba todavía fresca, el intento concertado por traducir el consenso producido por las políticas heterodoxas en medidas más “progresistas”, apoyadas por un pacto social amplio que pudiera proporcionar la base de un éxito político y económico a largo plazo.

Sin embargo, Alfonsín y sus asesores heterodoxos vacilaron en lograr apoyo popular para sus políticas. En lugar de ello, tal vez anticipando reacciones negativas de actores internacionales poderosos o del sector privado local, Alfonsín eligió apoyarse en las negociaciones secretas con empresarios y líderes sindicales —los “capitanes de la industria” y sus contrapartes sindicales antirreformistas. La incapacidad para articular un pacto social viable no sólo limitó gravemente las oportunidades de lograr una estabilización exitosa, sino que la retórica de los pactos sociales sin una base de realidad proporcionó la fachada detrás de la cual se ampliaba la prerrogativa del Ejecutivo sin el equilibrio y la participación de los políticos democráticamente electos.

Aquí se encuentra el *quid* del dilema de la consolidación democrática. ¿Es posible que los medios utilizados para llevar a cabo la estrategia económica del gobierno socavaran los propios procedimientos y mecanismos institucionales indispensables para las políticas democráticas? El análisis de la Unión Industrial acerca del Plan de Primavera ofrece información valiosa de una fuente insospechada.

Como ya se mencionó antes, la UIA señaló que Alfonsín y Sourrouille habían sido obligados por la resistencia en el Congreso a recurrir a los decretos ejecutivos. La UIA explicó inocentemente que los “modelos neoestructuralistas” de Sourrouille sólo podían funcionar con un gobierno lo suficientemente poderoso para imponer un “congelamiento autoritario” de precios y salarios. No obstante, como lo señaló la UIA, “en agosto de 1988, esto no era posible” (UIA, 1988: 21).

Cuando la economía se dirigió vertiginosamente hacia el precipicio de la hiperinflación, el Congreso intentó afirmar sus prerrogativas, pero la verdad es que bajo el gobierno de Alfonsín, los políticos del Partido Radical prácticamente no tenían idea acerca de las principales opciones de la estrategia macroeconómica. Aunque se consultó frecuentemente a las autoridades del FMI y el Banco Mundial, los líderes del Partido Radical en el Congreso, junto con los partidos de oposición, generalmente ni siquiera habían sido informados hasta que cada “nuevo” paquete de políticas estaba listo para ser lanzado en la televisión nacional. Esta preponderancia del poder ejecutivo sobre la rama legislativa, hacía que fuera casi imposible que el sistema partidario sirviera como mecanismo institucional legítimo para la mediación de los ineludibles conflictos sociales, intrínsecos a una sociedad tan compleja como la argentina. Este análisis de la democracia en transición en Argentina, refuerza las dolorosas lecciones aprendidas acerca de los regímenes autoritarios, es decir, que las formas tecnocráticas de hacer política, confinadas a los pasillos del poder ejecutivo, no poseen una racionalidad superior. Además, las formas excluyentes de hacer política contienen una lógica poderosa que casi inexorablemente lleva no sólo a la expansión de la burocracia estatal más allá de cualquier control, sino también a la consecuente privatización del poder del Estado, de manera que favorezca los intereses empresariales altamente organizados en detrimento del resto de la sociedad. Prácticas tecnocráticas similares bajo nuevos regímenes democráticos, se justifican frecuentemente con base en la supervivencia política a corto plazo, la necesidad económica pura, o la simple prisa. Estas justificaciones pueden parecer bastante convincentes, especialmente cuando quienes diseñan las políticas y los propios políticos a quienes sirven son verdaderos democratas comprometidos con las reformas sociales y económicas. No obstante, no importa qué tan atractivos sean estos principios, hasta la fecha en Argentina la evidencia apunta a la conclusión de que estos atajos aparentes son enemigos acérrimos de la verdadera tarea de consolidación y profundización democráticas.

Traducción de Lili Buj

BIBLIOGRAFÍA

- Acuña, Carlos, "Intereses empresariales, dictadura y democracia en la Argentina actual", documento preparado para el XV International Congress of the Latin American Studies Association, Miami, Florida, diciembre 1-4, 1989.
- Acuña, Carlos y Laura Golbert, "Los empresarios y sus organizaciones: actitudes y reacciones en relación con el Plan Austral", Buenos Aires (mimeo.), 1989.
- Ámbito Financiero*, "Los empresarios aceptan precios cero en octubre, pero resisten la apertura", 14 de septiembre, pp. 2, 50, 1988.
- Ámbito Financiero*, Entrevista con Adolfo Canitrot, 7 de septiembre, pp. 41-42, 44, 1989.
- The Argentine Letter*, vol. 1, núm. 3, 1988a.
- The Argentine Letter*, vol. 1, núm. 5, 1988b.
- Arida, Pérsio y André Lara-Resende, "Inflacao Inercial e Reforma Monetaria: Brasil," pp. 9-37, Pérsio Arida (ed.), *Inflacao Zero: Brasil, Argentina, Israel*, Río de Janeiro, Paz e Terra, 1986.
- Aznar, Luis et. al., *Alfonsín: Discursos sobre el discurso*, Buenos Aires, FUCADE/EUDEBA, 1986.
- Azpiazu, Daniel, Eduardo M. Basualdo y Miquel Khavisse, *El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80*, Buenos Aires, Editorial Legasa, 1986.
- Azpiazu, Daniel, Roberto Bisang y Bernardo Kosacoff, "Evolución estructural y apertura exportadora", *Boletín Informativo Techint*, núm. 253 pp. 25-75, 1988.
- Basualdo, Eduardo M., *Deuda externa y poder económico en la Argentina*, Buenos Aires, Editorial Nueva América, 1987.
- El Bimestre Político y Económico*, "Ley de Asociaciones Sindicales: normas nuevas y presiones antiguas," núm. 38 pp. 14-16, 1988.
- El Bimestre Político y Económico*, núm. 48, pp. 31-32, 1989.
- Central Bank of Argentina, Argentine Economic Memorandum, segundo trimestre, Buenos Aires, Central Bank, 1986.
- Central Bank of Argentina, *Argentine Economic Memorandum 1987, Second Quarter*, Buenos Aires, Banco Central, 1987.
- Central Bank of Argentina Ministerio de Economía, *Programa para la Recuperación Económica y el Crecimiento Sostenido*, Buenos Aires, Banco Central de la República Argentina, 1988.
- Corallini, Cecilia Mostro y Oscar Avalle, "La concertación como mecanismo de autorregulación de las demandas funcionales empresarias en la Argentina", *Boletín Informativo Techint*, núm. 241: 29-52, 1986.

- Clarín*, 27 de abril, entrevista con Saúl Ubaldini, 1986.
- Clarín*, 13 de agosto: 1, 1988a.
- Clarín*, "Cerrada oposición empresarial a la apertura de la economía", 23 de sept.: 3, 1988b.
- Clarín*, "Reportaje a Jorge Triaca: El Plan Primavera alienta conflictos", 6 de noviembre: 2, 1988c.
- Clarín*, "Con huelgas y sin perdón", 6 de noviembre: 16-17, 1988d.
- Clarín*, "El salario, en su punto más bajo", 25 de febrero: 5, 1990.
- De Ris, Marcelo Cavarrozzi, y Jorge Feldman, "Concertación, Estado y sindicatos en la Argentina contemporánea", *Estudios CEDES*, 1987.
- Dornbusch, Rudiger y Juan Carlos de Pablo, *Deuda externa e inestabilidad macroeconómica en la Argentina*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1988.
- Estudios INDEC*, "La pobreza en el conurbano bonaerense". núm. 13, 1989.
- Frenkel, Roberto, "Salarios e inflación en América Latina: resultados de investigaciones recientes en la Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Chile", *Desarrollo Económico*, núm. 100: 587-622, 1986.
- Frenkel, Roberto y Carlos Winograd, *Growth Exercise for Argentina*, Buenos Aires, (mimeo), 1989.
- Frenkel, Roberto, José María Fanelli y Juan Sommer, *El proceso de endeudamiento externo argentino*, Buenos Aires, Documento CEDES/2, 1988.
- Frenkel, Roberto y Guillermo Rozenwurcel, *Restricción externa y generación de recursos para el crecimiento en América Latina*, Buenos Aires, Documento CEDES/15, 1988.
- Frenkel, Roberto y José María Fanelli, "El Plan Austral: un año y medio después", Buenos Aires, (mimeo.), 1987.
- Frenkel, Roberto y Mario Damill, "Política de estabilización y mercado de trabajo. Argentina 1985-87", Buenos Aires, Documentos CEDES/8, 1988.
- García, Alfredo y Silvia Junco, "Historia de la renegociación de la deuda externa argentina", *Boletín Informativo Techint*, núm 245: 29-58, 1987.
- Gaudio, Ricardo y Héctor Domeniconi, "Las primeras elecciones sindicales en la transición democrática", *Desarrollo Económico*, núm 103: 423-453, 1986.
- Godio, Julio, "Lazzaretistas, desestabilizadores y renovadores", en *La Ciudad Futura*, núm. 1: 4-5, 1986.
- Heymann, Daniel, Fernando Navajas y Ignacio Warnes, *Conflicto distributivo y déficit fiscal: algunos juegos inflacionarios*, Buenos Aires, (mimeo), 1989.
- Hirschman, Alberto, "The Political Economy of Latin American Development: Seven Exercises in Retrospection", en *Latin American Research Review*, vol. 23, núm 3: 7-36, 1987.

- La Nación*, “Cuando se tienen más aliados de los que el rumor sugiere”, 19 de febrero: 7, 1989.
- Latin American Regional Reports: Southern Cone*, 11 de septiembre: 2, 1986.
- Lipnowski, Irwin y Sholomo Maital, “Hanging Together or Separately: A Game-Theoretic Approach to Macroeconomic Conflict”, pp. 39-96, en Sholomo Maital y Irwin Lipnowski (eds.), *Macroeconomic Conflict and Social Institutions*, Cambridge, Ballinger, 1985.
- Lopes, Francisco, *O Choque Heterodoxo: Combate a Inflacao e Reforma Monetária*, Rio de Janeiro, Editora Campus, 1986.
- López, Andrés y Gustavo Lugones, “¿Un nuevo crecimiento hacia afuera? La exportación de manufacturas como eje dinámico de la economía”, en *Nuevo Proyecto*, núm. 5-6: 139-154, 1989.
- Marshall, Adriana, “The Fall in Labor’s Share in Income and Consumption: A New ‘Growth Model’ for Argentina”, en William Canak (ed.), *Lost Promises: Debt, Austerity and Development in Latin American*, Boulder y Londres, Westview Press, pp. 47-65, 1989.
- Ministerio de Economía, *Plan de Reforma Económica*, Buenos Aires, 15 de junio, 1985.
- Ministerio de Economía/Banco Central, *Argentine Economic Memorandum 1987, Fourth Quarter*, Buenos Aires, Ministerio de Economía, 1988.
- Monteón, Michael, “Can Argentina’s Democracy Survive Economic Disaster”, en Mónica Peralta Ramos y Carlos Waisman (eds.), *From Military Rule to Liberal*, pp. 21-38, 1987.
- Monteón, Michael, *Democracy in Argentina*, Boulder y Londres, Westview Press.
- Orsatti, Alvaro, “El ciclo de los salarios y el empleo en el quinquenio radical (1984-1988)”, *Nuevo Proyecto*, núm. 5-6: 113-126, 1989.
- O’Donnell, Guillermo, “Argentina, De Novo”, en *Novos Estudos, CEBRAP*, núm. 24: 139-154, 1989.
- Página/12*, “Un tercio del país vive en la pobreza”, 10 de agosto, p. 3, 1989a.
- Página/12*, entrevista con Adolfo Canitrot, 10 Sept.: 8-9, 1989b.
- Palomino, Héctor, *Cambios ocupacionales y sociales en Argentina, 1947-1985*, Buenos Aires, CISEA, 1988.
- Palomino, Héctor, “La normalización de la CGT ¿Diez años no es nada?”, en *El Bimestre Político y Económico*, núm. 3: 11-14, 1987a.
- Palomino, Héctor, “Los conflictos laborales bajo el gobierno constitucional: del Plan Austral al Ministro de Trabajo Carlos Alderete (1985-1987)”, en *Debate Sindical*, Buenos Aires, Fundación Friedrich Ebert, 1987b.
- Paz, Pedro, “La gestión económica del radicalismo (1983/88)”, *Nuevo Proyecto*, núm. 5-6: 79-112, 1989.

- Poder Ejecutivo Nacional/Ministerio de Economía *Política para el cambio estructural en el sector público: Mensajes de los Proyectos de Leyes de Presupuesto 1986/1989*, Buenos Aires, Ministerio de Economía, 1989.
- Presidencia de la Nación/Secretaría de Planificación, *Lineamientos de una estrategia de crecimiento económico, 1985-1989*, Buenos Aires, 1985.
- Schvarzer, Jorge y Ricardo Sidicaro, "Empresarios y el Estado en la reconstrucción de la democracia en la Argentina", en *El Bimestre Político y Económico*, núm. 35: 5-14, 1987.
- Smith, William C., "Heterodox Shocks and the Political Economy of Democratic Transition in Argentina and Brazil", en William Canak (ed.), *Lost Promises: Debt, Austerity and Development in Latin America*, Boulder y Londres, Westview Press, pp. 138-168, 1989a.
- Smith, William C. *Authoritarianism and the Crisis of the Argentine Political Economy*, Stanford, Stanford University Press, 1989b.
- Sola, Lourdes, "Choque Heterodoxo e Transicao Democrática Sem Ruptura: Uma Abordagem Transdisciplinar", en Lourdes Sola (ed.), *O Estado da Transicao: Política Económica na Nova República*, Sao Paulo, Editora Vértice, pp. 13-62, 1988.
- Sola, Lourdes, "Límites Políticos ao Choque Heterodoxo no Brasil: Técnicos, Políticos, Democracia", en *Revista Brasileira de Ciências Sociais*, núm. 3: 38-69, 1989.
- Sourrouille, Juan V., *Mensajes del Ministro de Economía Dr. Juan V. Sourrouille*, volumen II, Buenos Aires, Ministerio de Economía, 1989.
- Stiles, Kendall W., "Argentina's Bargaining with the IMF", en *Journal of Interamerican Studies and World Affairs*, vol. 29, núm. 3: 55-86, 1987.
- Thompson, Andrés, "Sindicatos y Estado en la Argentina: el fracaso de la concertación social desde 1983", en *Boletín Informativo Techint*, núm. 251: 17-36. 1988a.
- Thompson, Andrés, "Negociación colectiva, democracia y crisis económica: Argentina 1983-1988", en *Boletín Informativo Techint*, núm. 255: 47-68, 1988b.
- UIA (Unión Industrial Argentina), *Declaración de la Unión Industrial Argentina*, Buenos Aires, 18 de marzo, 1986a.
- UIA (Unión Industrial Argentina), *Memoria y Balance, 1986*, Buenos Aires, UIA, 1986b.
- UIA (Unión Industrial Argentina), *Memoria y Balance, 1987*, Buenos Aires, UIA, 1987.
- UIA (Unión Industrial Argentina), *Memoria y Balance*, Buenos Aires, UIA, 1988.